

La crisis política de Abril

Por Luis Tapia*

Una crisis política es un momento de condensación y revelación. Es un momento de síntesis negativa de los procesos políticos, que revela, justamente en este momento de fusión problemática, que estos se estaban desarrollando de manera desarticulada. En una crisis se presentan y experimentan con fuerza los problemas que la sociedad estaba viviendo, a la vez que se evidencia el carácter de algunas ilusiones, sobre todo en referencia a los políticos en el gobierno.

En abril el Estado boliviano enfrentó una crisis producida por varios movimientos sociales que le plantearon sus demandas y manifestaron su rechazo a algunas de sus políticas económicas. Estas protestas se produjeron contra los efectos de la implementación de la política económica neoliberal y en dos núcleos territoriales, Cochabamba y el Altiplano, fueron resultado de una acumulación organizativa previa. Revisemos primero la dimensión de los efectos del neoliberalismo y luego la de la organización y recomposición de la sociedad civil.

En abril convergen por un lado la “Guerra del Agua” en Cochabamba, dirigida a expulsar a una empresa transnacional (Aguas del Tunari, un consorcio creado por capitales de EEUU, Italia, España y Bolivia) y por otro los bloqueos de las comunidades campesinas e indígenas en el Altiplano paqueño. Ambas protestas se enfrentan al proyecto de la ley del agua y a ciertos aspectos de la ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) que regula la propiedad y el mercado de tierras. Contra estas protestas el gobierno decretó el estado de sitio y simultáneamente enfrentó una huelga en el seno de la propia policía encargada de garantizarlo.

En el origen de los problemas que generaron la crisis se encontraba el proceso de creciente privatización y mercantilización de los servicios públicos y de las tierras. La privatización de los servicios públicos se ha dado generalmente a través del traspaso de empresas públicas a empresas transnacionales, a través del llamado proceso de “capitali-



zación”. Como consecuencia del mismo el 50% de las empresas públicas privatizadas pasa bajo el control y propiedad de las empresas del consorcio transnacional, mientras que el otro 50% queda como propiedad de los ciudadanos bolivianos representados a través de los Agentes de Fondos de Pensiones (AFPs). Sin embargo la dirección de las empresas privatizadas queda bajo control del capital extranjero ya que éste detenta la mayoría en los consejos directivos porque incluso los “representantes” de los ciudadanos bolivianos son elegidos por las AFPs.

La capitalización o privatización se ha hecho bajo el pretexto o justificativo de reducir los costos de los servicios como consecuencia de la mayor eficiencia e inversión que supone el capital privado y transnacional. La población, sin embargo, comenzó a experimentar una paulatina alza de los precios de los mismos. En ese sentido la población trabajadora sufre los efectos de una doble pauperización. Por un lado, una política de constreñimiento del salario y por otro un aumento de los precios de los servicios básicos de la reproducción social. Resulta un movimiento de pinzas del capital sobre la población asalariada.

En un contexto más general la actual fase de transnacionalización de la economía boliviana se caracteriza sobre todo por el traslado y creación de monopolios de los servicios públicos y de la explotación de los recursos naturales, y no por la inversión en transformación y manufactura.

* Director, Maestría de Ciencias Políticas. CIDES-UMSA. La Paz.

Así, lo que desató la última fase de la protesta organizada en Cochabamba, fue un fuerte aumento del servicio del agua para financiar las inversiones de la empresa, sin que esto significara una mejora del servicio. De esta forma la población era la que estaba capitalizando a la empresa transnacional, y no al revés, como el discurso del modelo decía que debería ser. Si la población es la que capitaliza a la empresa transnacional, bien puede prescindir de ella. Sobre esta situación se despliegan y legitiman entonces las tendencias o propuestas de autogestión que se manifiestan en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (la Coordinadora).

La capitalización y el proyecto de ley del agua que fue criticado y modificado venía a crear monopolios legales del usufructo mercantil del recurso agua en territorios de economía y cultura agraria donde se producía y vivía la articulación y continuidad de naturaleza y vida social en términos de control colectivo y comunitario de los recursos y de sí mismos. Propiciaba entonces la penetración y quiebre de esas totalidades sociales locales y regionales a través del control del recurso agua por parte de capitales privados, desligados del horizonte de reproducción y desarrollo local.

En este sentido el hecho de que el intento de la explotación del nuevo monopolio del agua persiguió no sólo beneficiarse de la mercantilización de los servicios ya existentes sino también obligar a la población a financiar la nueva inversión hizo despertar en ella la indignación, sus potencialidades de resistencia y sobre todo de autoorganización.

La expansión de la autoorganización es algo que se genera y se hace posible por la existencia de núcleos previos de organización, básicamente los comités de regantes y la federación de fabriles. Los primeros se organizan en reacción a la ley de aguas mientras que la segunda vivía una fase ascendente de reorganización de las fuerzas laborales en las nuevas condiciones de fragmentación y desindustrialización producidas por el neoliberalismo y la desregulación político-estatal del trabajo. Este vínculo de cultura organizativa agraria y obrera ha nucleado la protesta y victoria popular en Cochabamba.

En un primer aspecto la crisis de abril condensa las primeras reacciones masivas a los efectos de la implementación del modelo neoliberal. Durante la década de los ochenta hubo movilizaciones y resistencia contra la implementación de las reformas. Sin embargo estas resistencias fueron

vencidas y las protestas aparecieron cada vez más fragmentadas. En la misma década se declararon varios estados de sitio contra estas resistencias, generalmente organizadas en torno a la COB. Pero ésta es la primera vez en que se dicta un estado de sitio que ya no es para implementar a la fuerza alguna reforma desde el Estado, sino como respuesta a las resistencias, negaciones y protestas contra los efectos de estas reformas ya implementadas. El tiempo entre una fase y otra no ha sido muy largo. El último estado de sitio fue en 1995, declarado contra las protestas en rechazo a la capitalización de YPFB. La implementación de estos últimos bloques de reformas neoliberales avanzaba sobre el desgaste y la desarticulación de la protesta social resultado del debilitamiento de la COB, aunque en lo que se refiere a la ley INRA se generó un movimiento campesino y de pueblos originarios para intentar modificar la propuesta de ley.

En este proceso, después de cinco años del último estado de sitio y a cuatro años de la aprobación de la ley INRA, que formó parte también del último bloque de reformas económicas, las protestas de abril inician el ciclo de las revueltas contra los efectos de estas reformas.

“En este proceso, después de cinco años del último estado de sitio y a cuatro años de la aprobación de la ley INRA, que formó parte también del último bloque de reformas económicas, las protestas de abril inician el ciclo de las revueltas contra los efectos de estas reformas.”

En un segundo aspecto la crisis de abril puso en evidencia la existencia de una crisis del sistema de partidos políticos como mecanismo de representación y mediación. En ese parlamento

-aunque en otro período legislativo- se aprobaron las leyes que ahora cuestionaban la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo Boliviano) en el Altiplano y la Coordinadora en Cochabamba. Al aprobar el estado de sitio el sistema de partidos estaba reconociendo, sin quererlo, su inutilidad y artificialidad en relación a la representación de la población que participaba en los conflictos. En tanto el legislativo ha venido funcionando de facto como un apéndice de legitimación legal de las medidas promovidas por el Poder Ejecutivo, la representación de la sociedad civil ha estado ausente. Al representar los intereses de las elites y burocracias partidarias -que básicamente compiten por cargos públicos, a partir de los recursos que pueden movilizar e invertir en las campañas- los partidos políticos son satélites del ejecutivo, y no canales de representación de la sociedad civil, salvo de aquellos núcleos minoritarios del poder económico.

Frente a la distancia existente entre los partidos políticos y la sociedad civil, la crisis reveló que mientras tanto se habían desarrollado nuevas formas de asociación en Cochabamba -como los comités de regantes- y además una forma

de articulación general -la Coordinadora- que fueron capaces de producir la fusión de abril. Mientras parecía que la sociedad civil estaba cada vez más atomizada, desarticulada, corporativizada; como consecuencia de las políticas neoliberales y de la descomposición de la COB -que era la anterior articuladora de los movimientos sociales- la crisis de abril puso de manifiesto la existencia de nuevos procesos y dinámicas.

Y en ese sentido en abril se vive una crisis política en el Estado porque también se ha producido un cambio o reforma en el seno de la sociedad civil. Uno de los cambios

cional se han levantado las protestas, las resistencias, incluso alguna alternativa como en Cochabamba, donde no sólo se exigía el retiro de la empresa Aguas del Tunari, sino también se formuló una propuesta autogestionaria para la solución del problema del agua en la región.

Estos cambios ponen de manifiesto el pasaje de la larga fase de las luchas sociales mediadas por el nivel nacional de articulación, agregación y organización, que estaba dado por la COB, a una fase de luchas sociales con dirección y organización local. Esta localización de la política que antes estaba relacionada con los Comités Cívicos regio-



más significativos es que la Central Obrera Boliviana (COB) no fue la organizadora de los hechos y del movimiento. La centralidad de la COB ha sido sustituida por la emergencia de polos regionales de organización y acción política, que por su localismo tienen mayor intensidad y fuerza, aunque eso hace que todavía no estén articulados.

La implantación del modelo neoliberal ha fragmentado la nación, la política y la economía, reconfigurándolas en nuevos monopolios. Desde esos fragmentos de sociedad na-

cionales, en estos casos ha adquirido más intensidad y fuerza porque la representación regional se ha desplazado de los grupos de notables a representantes y dirigentes populares.

La política local se ha masificado en esas dos regiones del país y, en consecuencia, el liderazgo regional también se ha visto modificado y desplazado también. En el caso de Cochabamba, este desplazamiento se produce de las elites locales, empezando por el alcalde Manfred Reyes Villa, hacia los organizadores y representantes de la Coordinadora.

Por otra parte en el Altiplano el sindicalismo, que es la estructura formal que aparece como responsable de la movilización, expresa y contiene más lo comunitario indígena y sus redes que lo corporativo campesino; ésta es una de las líneas de desplazamiento de la dirección en el seno de la CSUTCB.

Desde esta perspectiva, en abril se pusieron de manifiesto los profundos cambios ocurridos en la organización de la sociedad civil, particularmente en algunas regiones. Estos cambios no resultaban visibles debido a que el sistema de partidos no representa los intereses de la sociedad y, por lo tanto, no registra ni procesa políticamente dichos cambios.

La crisis también muestra que hoy la política está organizada en dos polos, bajo diferentes principios y formas, que sólo se relacionan en coyunturas de crisis, como consecuencia precisamente de la falta e ineficacia de las mediaciones políticas existentes. Encontramos, por un lado, la po-

sino la Coordinadora la que impuso reformas al modelo de las privatizaciones. Parece ser el inicio de una fase o época de reversiones posibles de las políticas neoliberales, a partir de una recomposición de sectores importantes de la sociedad civil, que desarrollan o reavivan nuevas capacidades de organización.

A nivel general también pareciera ser que estamos pasando de la fase de implementación del modelo neoliberal y sus subsecuentes luchas de resistencia, a una fase de luchas y movilizaciones sociales de quiebre y reformas al modelo desde abajo. Una vez que este modelo ha descompuesto la articulación nacional y los lazos sociales y políticos de la vida cotidiana, la política antiliberal pareciera encaminarse en una acción de reconstrucción y rearticulación nacional, de reproducción y producción de sociedad más allá de la producción ampliada y dislocada de los capitales transnacionales.

La “Guerra del Agua” marca así un quiebre en la cadena de derrotas populares. Es la expresión intensa de un proceso de recomposición y cambio de rumbo; de un tránsito del arrinconamiento regresivo a la reorganización y posible expansión progresiva. Abril es un hito y un ejemplo que señala a otras regiones y sujetos sociales que sólo puede confiarse en las propias fuerzas y que si éstas se organizan y deliberan es posible cambiar la realidad.



lítica estatal concentrada en el ejecutivo con un legislativo altamente subordinado y con casi nula capacidad de representación; y, por otro lado, una sociedad civil emergente, diversificada regionalmente, que replantea los problemas locales y nacionales a partir de una fuerte localización de la política. Este proceso regenera formas asociativas y cuestiona al modelo de la políticas neoliberales.

Finalmente la victoria popular es el rasgo que diferencia a esta crisis y a este estado de sitio de los anteriores. Esta vez no fue el gobierno el que impuso una de sus reformas

Las victorias de Abril: una historia que aún no concluye

Por Humberto Vargas* y Thomas Kruse**

■ Un Relato

Una amiga cochabambina y sus dos hijos salieron presurosos de La Paz con dirección a Cochabamba. En Parotani se encontraron con decenas de vehículos que no avanzaban debido a un bloqueo. “Agarrada de mis hijos –me contó– emprendí valientemente la caminata hacia nuestra *llajta*, engullendo paso a paso la carretera. Los tres estábamos orgullosos de nuestro sacrificio: no cualquiera improvisa una caminata de cincuenta kilómetros (con algún aventón). Al llegar a la ciudad nos sorprendimos de encontrar las calles pobladas de enfrentamientos en los que muchos cochabambinos se oponían a la policía devolviendo los tubos de gas con las manos y a patadas. Vi con sorpresa que señoras de buen traje y peinado meticuloso alcanzaban botellas, bicarbonato y vinagre a la gente en la calle. Comprendí que no habíamos sido los únicos valientes. Entre gases, llanto y preocupación por mis hijos encontré allí algo que creí perdido: *todos participaban de alguna manera, con unidad y solidaridad...* No comprendía mucho de lo que pasaba. Sólo había entendido que la gente pedía a gritos: ‘¡Fuera Aguas del Tunari!’ en medio de los enfrentamientos. En la casa en que nos cobijaron momentáneamente, una señora nos explicó que en Cochabamba se libraba la “Guerra del Agua”. Entonces, en la televisión, luego de anunciarse noticias sobre la violencia en las calles, vimos a un político que decía: ‘Ninguna empresa querrá invertir nunca más en Cochabamba.’”

El relato de esta amiga refleja con fidelidad lo que la población en general y cada uno de los cochabambinos vivieron durante la “Guerra del Agua” del 4 al 11 de abril: valentías, sorpresas, amenazas, la unión de sectores diversos en solidaridades. En esos días, una serie de movilizaciones y protestas consiguieron la eliminación de un contrato del servicio de agua potable lesivo a los intereses de la población y

* Director. Centro de Estudios de la Realidad Social y Económica (CERES), Cochabamba.
e-mail: forhum@albatros.cnb.net

** Investigador. Programa de Investigación Estratégica Bolivia (PIEB), Cochabamba.
e-mail: tkruse@albatros.cnb.net



Bloqueo Villa México 08-04-2000 - Foto Thomas Kruse

lograron la modificación de una Ley que amenazaba esfuerzos colectivos en la construcción y mantenimiento, usos y propiedad consuetudinaria de sistemas de provisión de agua. El presente artículo se refiere al conjunto de elementos que llevaron al desenlace de esta situación. El primer acápite se refiere a las transformaciones que vivió el país desde el retorno de la democracia y la implantación del nuevo modelo económico. El segundo se dedica a los actores inmersos en el proceso desencadenado. El tercero realiza un resumen apretado de los principales acontecimientos. Finalmente se presentan conclusiones a partir de los resultados obtenidos, y se plantea que, a diferencia de otros análisis, hay un saldo altamente positivo de los acontecimientos.

■ El contexto: Bolivia hoy

Los bolivianos a partir de la democratización de la vida política, estamos viviendo en constante cambio. Desde la aplicación del ajuste estructural a través de la Nueva Política Económica de 1985 (con el Decreto Supremo 21.060) y con las posteriores transformaciones iniciadas en 1993, el país no es el mismo. Como veremos, se dieron cambios profundos en las organizaciones de la sociedad civil, las bases productivas y en las dimensiones políticas y culturales tanto de la sociedad nacional como de la local.

Emblemática es la destrucción sistemática que se ha operado en la Central Obrera Boliviana (COB), que duran-

te décadas pasadas tuvo la fuerza capaz de desestabilizar e incluso derrocar a cualquier gobierno. Por admisión de sus autores, esa fue la esencia política del Decreto 21.060.

La creciente informalización del aparato productivo se vive como una precarización del empleo y un aumento del des- y sub-empleo, que produce constantes erosiones y nuevas vulnerabilidades en el mundo del trabajo. Existe una flexibilización laboral de facto, en los 15 años desde el Decreto Supremo (DS) 21.060, 8 de cada 10 “puestos de trabajo” nuevos se han creado en el sector informal.

En el departamento de Cochabamba, escenario de la “Guerra del Agua”, el peso de la lucha antidroga impuesta por EE.UU. y ejecutada por los gobiernos cae sobre los productores campesinos más pobres, produciendo vulnerabilidad económica, desplazamiento de la fuerza laboral y exacerbando la recesión económica.

Los procesos de privatización (llamados “capitalizaciones”) de empresas estratégicas, iniciados en 1993, han significado para la economía nacional un empobrecimiento del Tesoro General de la Nación; no han generado los empleos prometidos y sí una pérdida de soberanía –en especial en el control sobre recursos naturales– y un aumento en el costo de ciertos bienes y servicios básicos. Apesar de la celebrada creatividad del proceso de “capitalización”, en los hechos los bolivianos hemos perdido control de las empresas “capitalizadas”.

A su vez, la privatización exige la creación del ámbito regulatorio facilitador de la inversión directa extranjera en desmedro del control social necesario. Este ámbito se construye por medio de un Congreso que opera como una extensión del Ejecutivo y trunca en vez de fomentar la deliberación sobre temas esenciales como la tierra y el agua. Así los procesos de privatización han sido manejados de maneras muy oscuras, agudizando la crisis de legitimidad. Por ejemplo, en la concesión del agua en Cochabamba, se autorizó por decreto a un Comité la negociación directa con el único consorcio proponente (Aguas del Tunari) mientras a espaldas de la población se amarró un contrato con férreas cláusulas de confidencialidad.

Hemos vivido un sistemático vaciamiento de lo público, tanto en lo económico (recursos destinados al bien común) como en lo político (la posibilidad de deliberar y decidir sobre el bien común). Los espacios como el parlamento y los concejos municipales han sido casi “privatizados” (conver-

tidos en dominio exclusivo) por los partidos políticos, mientras la política se circunscribe a microespacios o escenarios de “deliberación espuria”, vaciados de contenido. La hegemonía de los partidos sobre el proceso político formal ha generado prebendalismos ahora modernizados, corrupción, impunidad y crisis general de legitimidad del sistema político. Se da una creciente imposibilidad de acceder a información de vital importancia; esta información ha sido privatizada bajo una regulación neoliberal que se apoya en la confidencialidad¹.

En resumen, en las últimas décadas vivimos una dramática reorganización de la economía, el estado, la sociedad civil y la vida cotidiana, marcada por la fragmentación,

incertidumbre y vulnerabilidad. En lo económico, se ha comprobado lo dicho por el Dr. Jeffrey Sachs, arquitecto del DS 21.060 al principio del ajuste: “Yo les dije a los bolivianos, desde el principio, que lo que hay allí es una economía miserable y pobre con hiperinflación, [y] si son testarudos, si hacen todo correctamente, terminarán con una economía miserable y pobre con precios estables.” Efectivamente, tuvo razón, y hoy nos enfrentamos a una economía estable en su miseria, hoy en plena recesión. Lo político resulta una tarea ingrata: el *management* (más o menos corrupto) de la austeridad, con periódicos lamentos sobre lo “ingobernables” que resultan los “ciudadanos”.

En este contexto, la privatización del manejo del agua (administración local y programas de inversión) en Cochabamba tenía que haber sido un simple paso más. Estaban armados los nuevos marcos regulatorios, un estado privatizador empeñado en seducir a los inversionistas dizque imprescindibles para “una solución final del agua”, avalado todo por un Alcalde que fue reelegido con casi 52% del voto popular y una “megacoalición” de gobierno aparentemente sólida (de la cual el partido del Alcalde local era parte).

Pero lo que tenía que ser un simple paso más se convirtió en “abril”, ahora es sinónimo del desafío más inesperado, contundente y arrollador al “modelo” en sus 15 años de existencia. Ahora todos en Bolivia estamos en pleno proceso de interpretar y determinar el significado de las “lecciones de abril”.

■ Elementos y actores en el conflicto

Si bien el país había venido sufriendo empobrecimien-

“Hemos vivido un sistemático vaciamiento de lo público, tanto en lo económico (recursos destinados al bien común) como en lo político (la posibilidad de deliberar y decidir sobre el bien común). Los espacios como el parlamento y los concejos municipales han sido casi “privatizados” (convertidos en dominio exclusivo) por los partidos políticos.”

tos, reveses y simples insultos a la inteligencia y dignidad, ¿qué hizo del problema del agua un detonante de un estallido colectivo de proporciones mayores? Sugerimos tres cosas: lo “transversal” del problema del agua, que involucraba al mismo momento a campesinos, pobladores urbanos pobres y de clase media (lo cual hizo de él un punto de “condensación” de demandas); una capacidad organizativa y un accionar político (con p minúscula) “nuevo”, flexible y transparente de las fuerzas populares, que permitía una acumulación y adhesión dinámica; y, finalmente, un gobierno tan escaso de visión y simplemente torpe en su accionar que logró molestar y unificar a todos².

El desencadenamiento del proceso involucra a actores en muchos niveles: las corporaciones transnacionales, el Banco Mundial, gobernantes y elites nacionales y locales, dirigentes regionales, y comunarios y poblaciones locales. En el debate sobre quién provocó una guerra, nosotros responsabilizamos en medidas iguales a tres grupos: las entidades financieras internacionales, que aplican insensiblemente sus recetas e imponen dogmáticamente sus reglas del juego; los gobernantes nacionales, más preocupados por su imagen hacia fuera y por un “clima adecuado para la inversión” que por la situación de la gente; y las elites y gobernantes locales que hipócritamente se posicionan para cosechar jugosos beneficios con sus “socios” internacionales a expensas de los bolsillos de la población. Vayamos por partes.

■ El Banco Mundial

Ismail Serageldin, vicepresidente del Banco Mundial, dijo que las guerras del siglo XXI serían sobre el agua. De hecho en el mundo las fuentes de agua dulce escasean a un ritmo alarmante, engendrando conflictos inevitables. La respuesta del Banco Mundial es ver el agua como un bien escaso (como cualquier otro) y, de acuerdo con su lógica mercantil impecable, promover políticas de *full cost recovery*, es decir, transferir al usuario el costo total de provisión de agua.

En el caso de Cochabamba se aplicaron las recetas fielmente. Desde 1994, los periódicos locales anunciaron una y otra vez que el Banco Mundial exigía la licitación de SEMAPA -la empresa local de agua- como condición de créditos nuevos o renegociados. Por otro lado, el Banco (no sin razón) veía el megaproyecto Misticuni³ -proyecto añorado por generaciones de elites locales- como un elefante blanco cuya ejecución no se justificaba. Con una actitud punitiva y una irresponsabilidad homicida hacia el pueblo cochabambino, utilizó su palanca de *full cost recovery* para evitar que las elites cochabambinas “se equivocaran”. En el resumen ejecutivo de su revisión del gasto público boliviano en 1999, insistió vehementemente: “**Ningún subsidio público debe darse para paliar los costos de incremento de las**

tarifas de agua en Cochabamba, que debe reflejar full cost [costos plenos] la provisión por el proyecto múltiple Misticuni”⁴. Si bien este dictamen no determinó lo que se desencadenó, sí rayó la cancha dentro de la cual se hizo casi inevitable un desastre social del cual el Banco Mundial no puede lavarse las manos.

■ El consorcio Aguas del Tunari

En septiembre de 1999 los cochabambinos fueron presentados con un *fiat accompli* muy irregular. La empresa local de agua SEMAPA⁵ había sido licitada en un proceso totalmente irregular y oscuro y, ahora, los cochabambinos, sin saber los detalles, serían -bajo el consorcio nuevo- los generadores de las riquezas para: (a) ejecutar los sueños-mitos de las elites locales (reducidos a una inversión mínima de 300 millones en 3 a 5 años) plasmados en el proyecto múltiple Misticuni, cuya factibilidad financiera y social sigue sin sustento convincente; y (b) pagar al mismo tiempo las deudas acumuladas (aproximadamente 30 millones de dólares) de anteriores gestiones.

Pero esto, por admisión del mismo gerente de International Water, sólo explica un poco más del 50% del “tarifa-zo”. El otro 50% era necesario para producir un retorno garantizado de por lo menos el 16% anual en la operación del Consorcio⁶. El concesionario era por naturaleza lo que Luis Bredow preceptivamente califica como un “tiburón nervioso”. Tenía que ganar mucho y rápido para lograr su retorno garantizado, mientras simultáneamente creaba enormes *pools* de capital de inversión, antes de cualquier mejora sustantiva en el sistema de agua.

El consorcio Aguas del Tunari, con registro legal en las Islas Caimán, era la cría peculiar de algunos de los jugadores más importantes en el mundo del negocio de agua: International Water Limited (propiedad de Edison SpA de Italia y Bechtel de EE.UU.), con 50%, se juntó con Abengoa, de España (con 25%) y cuatro inversionistas bolivianos (25%), unos ligados al proyecto Misticuni y otros ligados a un partido del Gobierno.

Gregory Palast, especialista británico en temas de regulación y servicios básicos, revisó el caso cochabambino y efectuó el siguiente comentario: “Es un principio básico de la contabilidad que los inversionistas, no los consumidores, financian proyectos de inversión. Los que toman riesgos recuperan su inversión, con ganancias, en cuanto el proyecto produce un producto para la venta. Esto es el corazón, el alma y la justificación del sistema llamado ‘capitalismo’. Esta es la teoría. Pero cuando un operador monopólico tiene en su puño la cañería de una ciudad, puede bombear los fondos para sus proyectos de inversión [...] de los consumidores cautivos en lugar de sus accionistas.” En abril los co-

chabambinos rompieron con su “cautiverio”.

■ Actores nacionales

El Superintendente de Aguas –cargo creado por la Ley de Capitalización– firmó en septiembre de 1999 el contrato de concesión del que sería operador Aguas del Tunari. A pesar de su condición de regulador boliviano, permitió las cláusulas de confidencialidad mencionadas y que las tarifas sean indexadas al dólar y al IPC de Estados Unidos.

La coalición de gobierno negoció el apoyo de la oposición y el Congreso de la República promulgó en octubre la Ley de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley 2.029). Dicha Ley, entre otras cosas, transfiere a concesionarios el control exclusivo de los recursos hídricos de toda el área de concesión, violentando estructuras y prácticas ancestrales locales.

Ministros de estado y parlamentarios ignoraban completamente lo que habían aprobado. En abril, en medio de la “Guerra del Agua”, el Ministro de Comercio Externo –tan preocupado por la imagen de Bolivia– demostró un desconocimiento completo tanto de la Ley como del contrato suscrito.

Sería la combinación del tarifazo y esta apropiación draconiana la que provocó la “Guerra del Agua”. Se hizo patente que las autoridades nacionales, los parlamentarios, recién se enteraron en el conflicto de los contenidos de la Ley 2.029 y los contratos suscritos con Aguas del Tunari. La comisión de ministros que llegó a Cochabamba supuestamente a dialogar para encontrar una salida, también demostró una ignorancia imperdonable de los dos documentos, dejando claro que su objetivo era defender al consorcio y la “imagen de Bolivia” como país viable para la inversión aunque corriera sangre por las calles.

■ Las elites locales

Declarada desierta la primera convocatoria para la concesión por 40 años del servicio de agua y alcantarillado de Cochabamba, se realizó la segunda con participación de las elites locales, el Alcalde, el Presidente del Comité Cívico y del Prefecto departamental. Con su plena aprobación y por decreto se autorizó la negociación directa con el único consorcio proponente, Aguas del Tunari, avalando el tarifazo que detonaría la “Guerra del Agua”.

Al cargarle al nuevo Consorcio todas sus ineficiencias del pasado (la deuda de SEMAPA anterior a la concesión) y sus ambiciones de enriquecimiento futuro (generar el financiamiento del proyecto Misicuni), las elites garantizaron la aplicación del tarifazo explosivo⁷. De este modo llevaron a la población a un callejón sin salida bajo el supuesto de que

dicho proyecto era la fuente única de agua que Cochabamba necesitaba o “quería”, y jugaron feliz y peligrosamente sus proyectos locales y personales, confiando en que los platos rotos de esta fiesta –como tantos otros– los pagaría la gente.

■ Los regantes y la problemática del campo

El sector campesino en Bolivia tiene una larga tradición de lucha por recursos, en especial por la tierra y el agua, que con toda su complejidad está enraizada como la tierra misma. La Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) emergió de varios años de organización y lucha campesina, potenciándose de la rica tradición asociativa que sustenta la organización andina del campo. Aunque no libres de problemas medioambientales y de equidad en el manejo del agua, los regantes son coherentes, conscientes y tenaces en promover su agenda y lograr sobrevivir en situaciones terriblemente adversas.

La Ley 2.029 y el contrato con Aguas del Tunari monopolizaron el recurso agua en manos del consorcio con imposiciones odiosas e inviables sobre usos autogestionados y tradicionales. Ello representó para los regantes perder el control del recurso y, sobre todo, una pérdida de usos y costumbres (propiedad consuetudinaria). Esta entidad representativa y la gente que la compone (vitales, en el tema del agua) fueron total y deliberadamente marginadas de los procesos de regulación, licitación, contratación y gestión. Luego, desde el campo y con tácticas muy bien ensayadas, demostraron ser capaces de movilizar a una región entera.

■ Los barrios periféricos

La población no conectada al sistema del servicio público local, en cuanto tiene “soluciones” para no depender de aguateros (piperos, cisternas, etc.), lo hace a través de gestión y sacrificio propios o con ayuda de ONGs, iglesia, etc. Se estima que existen más de 200 sistemas locales, administrados y gestionados por pobladores.

En estos sistemas hay deficiencias medioambientales, de gestión y de equidad. No obstante, son producto de enormes esfuerzos, de creatividad y sacrificio. Con la privatización y la Ley 2.029, de golpe Aguas del Tunari se apoderó de todos ellos, creando un futuro muy incierto y preocupante para los pobladores y desdeñando su sacrificio y derecho a decidir sobre el destino de los sistemas comunitarios. Al igual que los regantes, estas poblaciones fueron marginadas de los procesos de regulación, licitación, contratación y gestión del sistema concesionado. En la “Guerra” estas poblaciones desarticulaban la ciudad del resto del país, cortando entradas y salidas; y desde sus barrios salieron centena-

res de jóvenes “guerreros del agua”.

■ Los consumidores de la ciudad

Durante muchos años los pobladores de la ciudad, donde existen 56.000 conexiones al sistema de agua, han sido objeto de manipulación en la gestión del sistema público de agua potable, y movilizados por las elites locales detrás de sus proyectos personales y/o políticos. Al igual que los otros actores, fueron efectivamente marginados de los procesos de regulación, gestión y decisión sobre el sistema de agua.

Aunque los partidos de la oposición anunciaron el tarifazo en la campaña electoral de 1999, igual llegó de golpe y por sorpresa a estos usuarios. Mientras el consorcio Aguas del Tunari e International Water insisten con que las alzas no pasaban de un 35%, en enero de 2000 empiezan a presentarse varios cientos de ciudadanos con las facturas de cobranza a la Federación de Fabriles, receptor general de denuncias en la ciudad y de facto sede de la Coordinadora de Defensa del Agua. Una revisión detallada de más de 200 historiales de pago presentados demuestra que las alzas eran de hasta un 200% y más. Por ejemplo:

- La familia de Julio Hinojosa, con un aumento de 30% de consumo tuvo entre diciembre y enero un incremento de 220%, de Bs. 143 a 314.
- La familia de Bertha Rojas, con un aumento de 15% de consumo tuvo un incremento de 82%, de Bs. 51 a 93,7.
- La familia de Ana María Sejas, con un aumento de 56% de consumo tuvo un incremento de 285%, de Bs. 235 a 670 (más de 100.00 us\$).
- La familia de Esteban Huayllani, sin ningún aumento en consumo, tuvo un incremento de 258%, de Bs. 11 a 28,4.

Adelantándonos a las conclusiones, la “Guerra del Agua” puso un fin inmediato a esta sangría feroz de los bolsillos de las familias cochabambinas. El periodista español J. L. Padilla escribió: “La adjudicación del contrato para el abastecimiento de agua potable en Cochabamba [...] iba a aportar unos ingresos anuales al consorcio de 63,1 millones de euros [...] durante cuarenta años, un total de 2.524,2 millones de euros”⁸. Haciendo un cálculo simple y rápido (usando como base 600.000 habitantes), esto equivale a aproximadamente 35 dólares americanos por familia por mes, en una ciudad donde el salario básico está alrededor de los 60 dólares.

■ “La Coordinadora”

Con los elementos expuestos arriba se explican en buena medida los elementos y actores que contribuyeron al estallido. Pero sin referencia a la Coordinadora –en buena medida también producto de la guerra– no se puede entender el trayecto de los eventos.

La “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida” sur-

gió ante un descontento popular generalizado y principalmente causado por la Ley 2.029, la percepción de una injusticia social en la concesión del agua y la necesidad de aglutinar distintos sectores que demandaban una respuesta socialmente organizada de repudio a los atropellos.

La demanda provino de y aglutinó inicialmente al Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, conformado por un grupo de ambientalistas y profesionales (que después sería el brazo técnico de la Coordinadora), los Regantes, la Federación de Fabriles, los maestros urbanos y rurales, universitarios y otros. Los dos primeros fueron los que inicialmente analizaron las implicaciones de la concesión y la Ley. A partir de noviembre, la Coordinadora lideró las acciones, sumándose las Federaciones de Colonizadores del Chapare, y luego contó con el apoyo importante de la Federación del Transporte Interdepartamental.

Sobre la Coordinadora recalcaremos aquí simplemente que fue excepcional en su capacidad de absorber y dar roles, espacio y protagonismo a todos los sectores que se iban sumando a la lucha (profesionales, campesinos, fabriles, comerciantes). Además, su práctica asambleísta, de ratificación popular y transparencia fue comprendida y apreciada inmediatamente por la gente. Luego de años de engaños por parte de la clase política, la Coordinadora proporcionó una lección importante en cuanto a otras formas distintas de protagonismo público.

Retrospectivamente queda claro que fue la forma idónea para ir sumando fuerzas: abierta, sencilla, consecuente en su accionar, y permanentemente en las calles, entre la gente. Queda por verse su capacidad de ganar ahora la paz, es decir, de contribuir a la resolución del problema del agua, o por lo menos ejercer un control social transparente sobre los gestores de “soluciones”.

■ Los días de Abril⁹

Para entender la contundencia de los días de abril, es necesario un breve recuento del proceso. En enero se dieron los primeros enfrentamientos por el problema del agua. En su “Manifiesto a Cochabamba”, la Coordinadora anunció: “Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan. Nadie va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo o toleramos la humillación de los malos gobernantes.” De acuerdo con la decisión de la asamblea, los días 11 al 13 de enero se bloqueó completamente la ciudad de Cochabamba. El resultado de las negociaciones que pusieron fin a los bloques fue más una tregua que una solución.

Hasta principios de febrero, cuando de nuevo estallarían los enfrentamientos en las calles, inexorablemente se irían desgastando los espacios de negociación. Por un lado, es

cierto que la flamante Coordinadora –con la excepción de los regantes y su equipo de análisis y apoyo– estaba poco preparada para renegociar y proponer modelos alternativos. Por otro lado, la mala fe del gobierno y su defensa a ultranza de la inversión extranjera y un contrato “amarrado” convenció rápidamente a los dirigentes de la Coordinadora de la inutilidad de negociar. Los sucesos ratificarían esta conclusión.

Con las negociaciones estancadas, la Coordinadora llamó a una “toma pacífica” de la ciudad para el día viernes 4 de febrero. Debía ser una marcha pacífica a la plaza de armas –centro simbólico del poder en la ciudad– seguida por unos discursos. Ese día la ciudad amaneció cercada. Y con refuerzo de tropas trasladadas desde La Paz, el gobierno reprimió violentamente a los manifestantes, declarando que no los dejarían ingresar a la plaza. La violencia y soberbia estatal sólo animaba la tenacidad de los marchistas, que no descansarían hasta realizar la toma. En un acto de extraordinaria necesidad, durante los días 4 y 5 de febrero el gobierno “defendió” férreamente un área simbólica de 4 cuadras alrededor de la plaza, mientras el pueblo controlaba el resto de la ciudad, y la región en paro. El cerco era insostenible: la gente tomó la plaza a las 11:30 de la noche del sábado 5.

Las partes –por un lado, el gobierno; por el otro, una alianza precaria entre la Coordinadora y el Comité Cívico– de nuevo firmaron una tregua insatisfactoria para todos, mientras se quiso transferir el conflicto a varias mesas de negociación: sobre la Ley 2.029, principal reclamo de los regantes, y sobre los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del contrato con Aguas del Tunari. Nuevamente se hizo evidente la dificultad de convertir un movimiento social en una estrategia negociadora. Y una vez más los hechos confirmaron la confianza ingenua que Aguas del Tunari depositaba en su protector, el Estado boliviano, y la ciega insistencia de este último de proteger su imagen de país viable para la inversión extranjera.

En marzo, la Coordinadora se salió del proceso de negociación, mientras el gobierno siguió negociando con un Comité Cívico cada vez más precario (al cabo de abril quedaría completamente desvirtuado e inoperante). A su vez, la Coordinadora se lanzó a un ejercicio extraordinario: una “Consulta Popular”, que movilizó a miles de activistas, parroquias, juntas vecinales y otros. En cientos de puntos de la ciudad se colocaron ánforas, donde más de 50.000 personas depositaron sus respuestas a tres preguntas sobre las tarifas, el contrato, y fuentes de agua. El proceso fue calificado como un *show* por parte de la clase política y los enemi-

gos de la Coordinadora. No obstante, sugerimos que ha sido un ejercicio importante. Organizada y llevada a cabo en menos de 10 días, logró la participación de más del 31% de los votos emitidos en la elección municipal de diciembre de

1999. Por otra parte, la Coordinadora estaba dando a la sociedad civil y la clase política lecciones prácticas y colectivas de las características de la democracia que quiere y demanda: correspondencia entre voto popular, políticas públicas y resultados concretos.

“A su vez, la Coordinadora se lanzó a un ejercicio extraordinario: una “Consulta Popular”, que movilizó a miles de activistas, parroquias, juntas vecinales y otros. En cientos de puntos de la ciudad se colocaron ánforas, donde más de 50.000 personas depositaron sus respuestas a tres preguntas sobre las tarifas, el contrato, y fuentes de agua.”

Y así llegamos a abril. El día 4 de abril la Coordinadora convocó a iniciar la “batalla final” por sacar a Aguas del Tunari y reformar la Ley 2.029, y los primeros dos días se realizaron la toma de la sede del Comité Cívico y la toma (todavía) simbólica de las instalaciones de Aguas del Tunari; bloqueos feroces en el campo; en la ciudad, bloqueos efectivos pero no férreos; y concentraciones y marchas que tendían a desgastarse. El jueves 6 en la tarde fue el punto más bajo para el movimiento. Los dirigentes de la Coordinadora, el presidente del Comité Cívico, empresarios privados y autoridades locales y centrales se reunían en la Prefectura, mientras a las puertas del edificio un grupo de más de 1.000 personas impedían la salida de quienes negociaban, hasta que se obtuviera una resolución aceptable. Comentó el Ministro de Educación, miembro de la delegación del gobierno y cochabambino, que era imposible negociar “bajo presión” con “salvajes en la puerta.”

Con instrucciones de La Paz, la policía apresó a todos los que negociaban por parte de la Coordinadora, dando la razón a la desconfianza popular y un motivo para continuar luchando a la gente que se encontraba en las calles. A partir del viernes, Cochabamba era de la Coordinadora. En las calles se peleaba cuadra por cuadra para llegar nuevamente a la plaza; los medios de comunicación se inundaban con las voces de los vecinos de la ciudad. No sólo eran espacios de denuncia; eran directamente medios de movilización de gente, alimentos, equipos médicos y apoyo moral a los que se hallaban en la calle. Se estima que en la tarde unas 60.000 personas activamente controlaban la ciudad.

Los sucesos del viernes se conocen popularmente en Cochabamba como “el engaño”. En la tarde, el Prefecto –máximo representante del poder central en el departamento– llamó a una conferencia de prensa y al lado del Arzobispo anunció que el contrato había sido revocado, agregando que prefería “un cochabambino sucio” (sin agua) frente a un “cochabambino muerto”. Entonces el júbilo se apoderó de la multitud.

Mientras el Arzobispo celebraba una misa en la Catedral por la paz, el gobierno ya estaba tendiendo la trampa en que caerían algunos miembros de la Coordinadora, quienes fueron detenidos en allanamientos violentos de sus domicilios y deportados como parte de un Estado de Sitio que recién se declararía al día siguiente. Varios otros ingresaron a la clandestinidad.

En el fragor del sábado y de este engaño, nacieron los autodenominados “guerreros del agua”. La actitud de incompreensión y burla del gobierno enardeció más a la gente, que reaccionó, incrementando la violencia al retomar las calles, en las cuales esta vez había presencia adicional de fuerzas militares. Ese día, el principal periódico de Cochabamba puso en su primera plana, en letras gigantes, un titular simple y verídico: “GOBIERNO MIENTE YREPRIME”. Con sus dirigentes en la clandestinidad, la gente tomó las calles con una furia que sorprendió a todos, sin importar el estado de sitio declarado.

Las cosas habían cambiado. Ahora había también militares con balas de guerra. Fue una mañana de mayores enfrentamientos: cayó una víctima a manos de un francotirador y hubo varias decenas de heridos de bala. Durante los próximos dos días y medio, los “guerreros del agua” harían suya la Plaza, organizando puntos de control, sistemas de vigilancia desde la torre de la catedral y mecanismos para la distribución de comida y primeros auxilios. Símbolo del poder central, la Plaza estaba bajo el control de esos guerreros; las calles en manos de la gente, habiéndose replegado las fuerzas represivas a sus cuarteles y a ciertos bolsones estratégicos.

Aunque el gobierno central insistía en forma vehementemente en que no negociaría con la Coordinadora –arguyendo que legalmente no existía– empezaron las negociaciones en secreto el lunes en la mañana. En la tarde ya hubo una “solución”: efectivamente el gobierno concedió todo lo que pedía la Coordinadora, menos el levantamiento del estado de sitio. El acuerdo incluyó el retiro de Aguas del Tunari, la liberación de los detenidos, la atención de los heridos y la reformulación inmediata de la Ley 2.029. Para ello una delegación de la Coordinadora partió a La Paz, y tras prolongadas sesiones en el Congreso, se aprobó en horas una ley modificatoria que en otras circunstancias habría demorado meses. Con autodisciplina, un uso mesurado de violencia, con una unidad y solidaridad práctica asombrosa, el pueblo de Cochabamba había ganado una batalla decisiva.

■ A manera de conclusiones

¿Por qué decimos victorias? Planteamos que la “Guerra del Agua” dio a la población cochabambina victorias en varios niveles. Algunas son inmediatas y tangibles, como la reducción de las tarifas de agua. Otras son más de mediano y largo plazo, y en verdad sólo serán victorias si logramos con-

vertir las potencialidades de hoy en resultados de mañana.

En primer lugar, decimos victoria porque se evitó un desastre económico de proporciones mayores. De haberse consolidado, la concesión a Aguas del Tunari habría sido en el corto y mediano plazo una operación de sangría de recursos injustificable. Aunque la gente en las calles no entendiera a fondo los detalles del contrato, sí captó los orígenes y lógicas perversas de la concesión y el hecho simple de que iba a ser esquilada económicamente para financiar proyectos y procesos que no la beneficiarían. Y no se equivocó.

En segundo lugar, decimos victoria porque en lo político se establecieron precedentes urgentes para nuestro tiempo. Fueron reveladas las lógicas perversas y prácticas corruptas en todos los niveles de gobierno y de las instituciones financieras internacionales. Lejos de ser un debilitamiento de la democracia, estas revelaciones abren la posibilidad de su reconstrucción real. Es el “no” necesario que antecede a un “sí”, y contiene la semilla para su construcción. Esto tiene implicaciones políticas y prácticas concretas. Por ejemplo, “abril” dejó en claro que los agentes del gobierno, así como los empresarios, consideraron que el agua es un bien cuya monopolización comercial les brindaría beneficios privados sobre sacrificios sociales. Por el otro lado, “abril” demostró que mucha gente considera que el agua, por ser un bien escaso, debe ser tratado como un bien común, y bajo esta premisa, luchó para eliminar la amenaza de un contrato y una ley retrógrada y atentatoria y para afirmar el carácter social del agua. Debe señalarse también que se dieron varias rupturas fructíferas de la institucionalidad existente en el Parlamento, el Poder Ejecutivo, los partidos, el Comité Cívico y las organizaciones sindicales, entre otras. Estas rupturas constituyen una alerta y a la vez una enseñanza para el fortalecimiento de la democracia.

Además, el espacio público construido era por excelencia lo que los teóricos de la democracia actual tan ansiosamente buscan y proponen: un espacio de deliberación y reflexión. Como nunca todo era decible y dicho, todos (casi) eran actores y analistas. Y ahora en la “pos-guerra” se requiere de actores responsables y coherentes, y en este sentido “abril” también propició lecciones. Es importante señalar que en este momento de posibilidades dramáticamente abiertas, no se produjeron saqueos ni destrucciones mayores. “Abril” no es comparable con lo ocurrido, por ejemplo, en Los Angeles en 1992. En Cochabamba, sobre la marcha emergió una moral pública con un grado extraordinario de autocontrol y responsabilidad.

No sólo hubo una responsabilidad importante en el accionar social. Hay –percibimos– una notable responsabilidad en asumir la búsqueda de soluciones que rompen con el binomio espurio de “estado versus mercado.” Sosteniendo esta búsqueda hay dos nuevos factores que antes no existían: la presencia de “nuevas” fuerzas y una capacidad propositiva de

las mismas, ante los problemas que tanto agobian a la gente.

Los regantes demostraron que un movimiento social puede también tener una extraordinaria capacidad en cuanto a producir propuestas viables. En esto se destaca que varias fundaciones y ONGs cumplieron un papel muy importante de apoyo y acompañamiento, sobre todo en la formulación de cambios legislativos. La situación de la empresa local de agua es más precaria. Hoy por hoy no existe el apoyo técnico del que gozaron los actores rurales, mientras la actitud de las elites locales es la de esperar del “fracaso inevitable” de la Coordinadora, o el sabotaje abierto.

No obstante, la Coordinadora sentó pautas importantes al respecto. Se inició un proceso constante de interacción entre la nueva empresa municipal *ad hoc* de agua y los barrios de la ciudad; se fomenta una discusión abierta, pública y participativa sobre el problema del agua, con la participación de organizaciones barriales, ecologistas, regantes y comunidades rurales, empresarios y grupos autogestionarios, con diversas propuestas que apuntan a cumplir el objetivo de tener una empresa eficiente, con transparencia y con equidad social.

Queda por verse si la Coordinadora puede concertar y operacionalizar lo necesario para abastecer de agua a más gente sin perder el nuevo sentido común articulado en abril. La ventaja es que hoy, después de la “Guerra”, la gente piensa y habla como nunca del problema del agua y de sus posibles soluciones, en una especie de politización altamente positiva, a diferencia del pasado reciente, cuando el problema permanecía bajo una neblina gruesa de manipulaciones y mentiras.

En otros niveles –por cierto más intangibles y de largo aliento– insistimos en que se dieron otras victorias. La “Guerra del Agua” hizo añicos el vocabulario y sentido común que implantó el neoliberalismo, que cerraban acceso a los materiales del pasado y presentaban el presente como algo inevitable. Sólo había que echar una mirada a las calles para desmenuar las mentiras oficiales. El titular que decía: “Gobierno miente y reprime” fue un momento, tal vez sin precedentes, de lucidez y honestidad en el periodismo *mainstream* boliviano, y emblemático de esta ruptura semántica. En fin, el orden simbólico del ejercicio del poder estatal sufrió –por un momento, al menos– un dramático reajuste.

Otra victoria más intangible en la “Guerra del Agua” fue cierta recuperación de la memoria histórica. Entre las cosas que más se escuchaban por la radio, en contacto permanente con la gente en las calles, están frases como: “Así era antes ... me acuerdo de 1971 (1979 ó 1980)” y, más específicamente: “Este señor Bánzer no ha cambiado nada.” Muchos jóvenes recalcan cómo sus padres, por primera vez, hacían referencia a la violencia institucional de los gobiernos de facto. Muchos padres de familia, aunque no sin temores lógicos, alentan, con sus historias personales y experiencias prácticas, el enfrenta-

miento de sus hijos en las calles con la violencia institucional de hoy. En fin, abril nos demostró que la amnesia no es una condición permanente, que la acción colectiva es posible y eficaz, y en Cochabamba estamos lejos del final de la historia.

■ Notas

1 El caso de Aguas del Tunari es instructivo. Bajo las cláusulas de confidencialidad el conocimiento público sobre un tema determinante de la vida económica y política de una región estuvo legal y sistemáticamente negado. En el contrato se lee: “24.3 Confidencialidad -- 24.3.1 Ninguna de las partes divulgará a terceros información alguna cuyo carácter confidencial haya sido especificado por la otra parte o de la cual conozca, se entere o tome conocimiento directo en virtud de su participación en este Contrato y en las negociaciones que llevaron a la celebración del mismo. Dicha obligación de mantener la confidencialidad se extiende a todo el personal al servicio de las Partes por lo que las mismas deben adoptar las medidas que sean necesarias para que dicho personal cumpla con las normas de confidencialidad aquí establecidas. Ambas partes deberán cumplir con esta cláusula a menos que cuenten con la autorización de la otra parte, con orden judicial o requerimiento de autoridades nacionales o municipales competentes. Para los efectos de esta cláusula, los Accionistas y los Accionistas Últimos del Concesionario, así como el operador de Aguas no serán considerados como terceros. ---24.3.2 Para fines del párrafo anterior, se considerará como información confidencial toda aquella información obtenida en la sala de datos como parte del proceso de licitación y negociación, incluyendo entrevistas con personal autorizado y visitas de inspección a las instalaciones de SEMAPA. Igualmente, toda aquella información presentada por el Concesionario con relación al proceso de licitación y negociación o por los Accionistas en relación con su oferta de suscribir el presente Contrato se considerará como confidencial. --- 24.3.3 La obligación de guardar la confidencialidad que cada parte asume según lo dispuesto en la Cláusula 24.3.1 subsistirá por un plazo de cinco (5) años desde la terminación del presente Contrato por cualquier causa.”

2 Hace poco Oscar Olivera, un portavoz de la Coordinadora de Agua en Cochabamba, tuvo la oportunidad de encontrarse con el sudafriicano Trevor Ngwane, cuya lucha contra la privatización de agua en Johannesburgo provocó su expulsión del Congreso Nacional Africano. Ngwane le preguntó a Olivera cómo había logrado unificar a toda la gente; respondió Olivera con humildad, “olvidándose” de las labores febriles de organización de los meses anteriores: “Ah; esto lo hizo el gobierno.”

3 El proyecto propone trasvasar aguas de la cordillera al valle, con un costo superior a los 400 millones de dólares (presa de 120 metros de altura, túnel de 19 km de longitud y caída forzada para electricidad).

4 Negrilla en el original; ver *Bolivia Public Expenditure Review*, Report No. 19232-BO, 14 junio 1999, Resumen Ejecutivo.

5 Es la Empresa pública del servicio de agua potable y alcantarillado local. Desde 1970 dependía del Ministerio del ramo, con autonomía administrativa y con el Alcalde como Presidente nato de su Directorio.

6 En el contrato se lee: “4.2 Aplicación de la tasa de retorno. La tasa Mínima de Retorno será del 15%. La Tasa Máxima de Retorno será del 17%.”

7 Cuando ya había reventado la guerra, Didier Quint, Gerente General de International Water LLC, confirmó lo mismo, queriendo –ingenuamente, por cierto– hacerse pasar como una pobre víctima de las voraces y corruptas elites locales. En una carta dirigida al periodista Jim Shultz, escribió: “En el curso de las negociaciones, no pudimos lograr enmiendas del estado o la alcaldía que hubieran permitido un incremento menor de las tarifas. Por ejemplo, la alcaldía quería que nosotros pagáramos la deuda anteriormente acumulada de SEMAPAY que se incorporara ese costo a la estructura tarifaria. Del mismo modo, la alcaldía insistió que firmáramos y ejecutáramos el contrato de construcción de una planta de tratamiento con OTV (una subsidiaria de Vivendi), que nosotros creíamos era innecesaria y de precio excesivo. Además, el estado decidió que Agua del Tunari pagaría por usar el túnel en construcción y la alcaldía decidió cobrar a Aguas del Tunari por los activos existentes de SEMAPA. En resumen, tuvimos que reflejar en el incremento de tarifas todos los incrementos que nunca antes habían sido implementados. Si se suman estos requisitos a la construcción apresurada del proyecto Misicuni, estimamos que explican más del 50% del aumento de tarifas. Ninguno de ellos era necesario y fue realizado en contra de nuestra opinión”.

8 *Empresas*, 12 de abril de 2000, “El grupo Abengoa se atraganta con el agua de Bolivia”.

9 Queremos reconocer el aporte en el relato de acontecimientos de Luis Tapia,

Cochabamba: la Guerra contra el Agua

Por Roberto Laserna*

Un periodista extranjero de escaso castellano llamó un día para preguntar sobre la “guerra contra el agua”. Pensé de inmediato en corregirlo pero me di cuenta de que su error de lenguaje era, más bien, analíticamente certero. Los cochabambinos habíamos sido conducidos a una victoria contra el agua. Empezaron esa guerra los que quisieron aprovecharse de las necesidades y aspiraciones de la gente para montar un proyecto insostenible, y la culminaron quienes lograron aprovecharse de la bronca y la protesta para recuperar o ganar posiciones de poder, o conservar pequeños privilegios.

En el complejo y todavía inconcluso entereverco cochabambino convergieron varios procesos y se superpusieron muchas tensiones. La cuestión del agua fue central pero también sirvió como pretexto para ensayar otras batallas. En esa amalgama se produjo una de las movilizaciones más participativas y espontáneas de los últimos tiempos, guiada por un discurso popular revolucionario, pero orientada por objetivos profundamente conservadores y reaccionarios en la práctica, generando resultados opuestos a los que ilusionaron a los participantes. Al final, fueron los excluidos quienes pusieron el mayor coraje en esta lucha, y son ellos los que hoy asumen los costos de una guerra con pocos vencedores y muchos vencidos.

En este artículo concentramos nuestra atención en el conflicto del agua aún sabiendo que en los disturbios de abril se pusieron de manifiesto también otras causas y razones de protesta y descontento social. El análisis permite observar de qué manera esas otras razones también aprovecharon la temática del agua y la concesión del servicio para expresarse aunque en un espacio que de alguna manera terminó imponiéndoles un lenguaje que impidió que se expresaran de una manera más explícita. En cierto sentido, el agua fue también una bandera que, aunque terminó desgarrada en el conflicto, atrapó en sus pliegues a los que la enarbolaron con otras intenciones.

* Investigador de CERES y ex-miembro del Comité Directivo de CLACSO.



Policía en línea 08-04-2000 - Foto Thomas Kruse

■ El problema del agua en Cochabamba

El servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba es probablemente uno de los peores que una ciudad de más de 500 mil habitantes puede tener en la actualidad. La cobertura del sistema público apenas alcanza a la mitad de la población y con abastecimiento irregular y racionado. De la otra mitad, los que cuentan con recursos se han visto obligados a crear sus propios sistemas, habitualmente basados en pozos de propiedad colectiva o privados. Y los que carecen de recursos no tienen más remedio que recurrir a los proveedores itinerantes, comprando ya sea el sistema entero (los hay desde 6 hasta 12 metros cúbicos) o por barriles de 200 litros. En esta escala, la peor calidad y el precio más alto corresponden a los barriles, de donde resulta que la población más pobre es la que consume la peor agua, pagando por ella los precios más altos, no solamente en términos económicos sino, lo que es aún más grave, en salud y en mortalidad infantil. La tasa de mortalidad en las zonas sin servicio público de agua es más de tres veces superior al resto.

Tal situación no es el resultado de unos pocos años de mala administración, sino de muchos años en que faltó voluntad política y capacidad de gestión para enfrentar el problema. Faltas que no pueden ser solamente atribuidas a las autoridades sino también a los propios cochabambinos, que poco a poco nos habituamos a lo que los expertos llaman “equilibrio de bajo nivel”. Resignados a la escasez, terminamos aceptando el

mal servicio como una fatalidad. Llegamos a creer en todas las explicaciones tecnocráticas dado que quienes estaban a cargo de la alcaldía eludieron sistemáticamente tratar el tema desde que se libraron de esa responsabilidad con la creación de una empresa descentralizada como SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado).

■ “Verde es Misicuni”

La resignación se renovaba periódicamente con una esperanza luminosa que no solamente prometía agua en abundancia sino también energía para las industrias y riego para la agricultura: el Proyecto Múltiple Misicuni. Este proyecto ha encabezado todas las demandas regionales en Cochabamba desde los años ‘70, y ha sido el principal aglutinante del Comité Cívico, la organización que articula el sentimiento y la movilización regionales.

Misicuni es un río formado con los deshielos de la cordillera y que vuelca sus aguas hacia la cuenca amazónica. Está situado en el lado noreste de la cordillera del Tunari formando un pequeño valle a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Cerrando una pequeña cañada con una represa de 120 metros de altura se piensa crear una laguna artificial de la cual se obtendría un flujo regular y abundante de agua. Más que la represa, el gran desafío ha sido siempre el traslado del agua hacia la parte sur de la cordillera que es donde se encuentran el valle central y la conurbación de Cochabamba (700 mil habitantes aproximadamente).

La solución técnica y punto crítico del proyecto consiste en la perforación de un túnel de 19,5 kilómetros y poco más de dos metros de diámetro, que atravesará montañas que en algún momento alcanzan un kilómetro de roca por encima del túnel. Y sólo esto ya absorbe cuando menos 70 millones de dólares.

Con la represa y con el túnel se contaría con agua suficiente para generar energía eléctrica aprovechando la caída hacia el valle, y la abundancia haría también viable la expansión de la red de agua y la dotación de riego a las tierras del valle central. Y en el futuro un par de túneles más podrían aumentar los volúmenes de embalse con las aguas de los ríos Putucuni y Viscachas, lo cual aumentaría la oferta de agua a Cochabamba.

Para hacer realidad este sueño solamente hace falta dinero, porque además del túnel, que es lo único que hoy

cuenta con algún financiamiento, la inversión requerida para la fase inicial alcanza a otros 70 millones de dólares... descontando los generadores de energía que con la tecnología y los precios actuales de gas, en vez de mejorar la rentabilidad del proyecto, le representarían cuantiosas pérdidas. Y esa inversión solamente tiene sentido si se garantiza, además, que se invertirán otros 200 millones de dólares para hacer potables esas aguas, distribuir las a toda la población mediante red domiciliaria y tratar las aguas servidas.

Por lo tanto, la inversión y su rentabilidad no son pequeños detalles.

■ Está verde Misicuni

Luego de 12 millones de dólares invertidos en estudios y de treinta años de movilizaciones regionales, el proyecto Misicuni logró capturar la imaginación de los cochabambinos pero no sus bolsillos ni el interés de los inversionistas. La última gran movilización a favor de Misicuni se realizó en pleno proceso electoral de 1997, cuando el Comité Cívico y la

Alcaldía lograron desarticular la propuesta alternativa del gobierno de Sánchez de Lozada, que giraba en torno a las aguas ya embalsadas de Corani (al noroeste de la cordillera), comprometiendo el apoyo a Misicuni de todos los candidatos no oficialistas.

“¡El acto estrella de la campaña del 2002 sería la entrega del túnel de Misicuni! (...) Enceguecidos por el entusiasmo se dejaron caer en la tentación todos los que poco después formarían la mayor coalición gubernamental de nuestra historia democrática.”

Para entonces, reuniendo todos los recursos captados hasta ese momento en una cuenta especial, se había logrado convocar a licitación para la construcción del túnel, con la ilusión de que una vez concluido facilitaría el financiamiento de las obras siguientes. Pero a los pocos meses de iniciada la perforación, el consorcio Condotte-Asapi rescindió el contrato. Probablemente se dio cuenta de que los riesgos de la obra no justificaban el presupuesto. Y saltó a escena el segundo proponente, Ice-Astaldi, ofreciendo ejecutar la perforación ajustada al cronograma electoral. ¡El acto estrella de la campaña del 2002 sería la entrega del túnel de Misicuni! Era muy atractivo. Más aún si se lograba avanzar en la construcción de la represa. Enceguecidos por el entusiasmo se dejaron caer en la tentación todos los que poco después formarían la mayor coalición gubernamental de nuestra historia democrática.

Derrotado, el Presidente Sánchez de Lozada recurrió a la ironía mordaz al preguntarse si los cochabambinos querían agua o Misicuni. Tenía razones para sentirse frustrado. Dos años de intensas negociaciones con la capitalizada em-

presa Corani fueron echados al canasto en julio de 1997. Para atraer inversionistas que pudieran ampliar la red de agua en Cochabamba, el gobierno había pensado incluir entre los documentos de concesión una detallada propuesta de la Empresa Corani ofreciendo proporcionar casi la misma cantidad de agua que la proyectada en la fase inicial de Misicuni pero a un costo mucho más bajo, con menos riesgos y menor incertidumbre. A diferencia de Misicuni, esta opción permitía conocer con anticipación el costo del agua y también se habían acordado los mecanismos de revisión de dichos costos en los 40 años siguientes. Era el inversionista privado quien asumiría los riesgos de la perforación de un túnel -también necesario para traer las aguas de Corani hacia el valle- y se haría cargo del financiamiento, en parte ya garantizado en su contrato de capitalización.

Nada de eso sirvió para dismantelar la dimensión ya mítica de Misicuni.

■ The Tunari Waters coalition

Alentados por su victoria, el Alcalde Reyes Villa, el Comité Cívico y el nuevo gobierno nacional ADN-NFR-MIR-UCS licitaron la concesión de SEMAPA. Pero en vez de adjudicarla según la mejor propuesta de cobertura, calidad y tarifas del agua, lo hicieron según la posibilidad que ofrecieran los proponentes de hacer realidad el mito de Misicuni. De las quince empresas que compraron el pliego de licitación, la mayoría se desanimó y las otras -Bechtel vía International Waters, Edison y compañías bolivianas- se unieron para formar juntas un consorcio: Aguas del Tunari. En vez de declarar desierta la licitación, el gobierno autorizó mediante decreto la negociación directa, asegurándose de involucrar en la misma no sólo a sus representantes sino también a los de la Alcaldía, el Comité Cívico y SEMAPA. Para continuar impulsando un proyecto tan riesgoso y de tan dudosa rentabilidad se requería mantener intacto el principal capital con que cuenta el proyecto Misicuni: el apoyo político.

Es seguro que Aguas del Tunari tomó también en cuenta ese capital. De otro modo es difícil explicarse que firmara un contrato que implicaba empezar su gestión aumentando tarifas congeladas desde hace varios años, sin demostrar siquiera si podía mejorar el servicio. Y que se comprometiera a desarrollar Misicuni como fuente principal de agua existiendo alternativas más viables y baratas. Si el pueblo de Cochabamba había mostrado de manera tan persistente su apoyo a Misicuni y había respaldado tan masivamente a su Alcalde, podía suponerse que estaba dispuesto a un pequeño sacrificio para realizar su anhelo. Y si por otro lado el Gobierno Nacional respaldaba el proyecto, y ese gobierno representaba más del 70% de la votación popular, podía también suponerse que nada se opondría a la concesión, si ésta permitía realizar Misicuni.

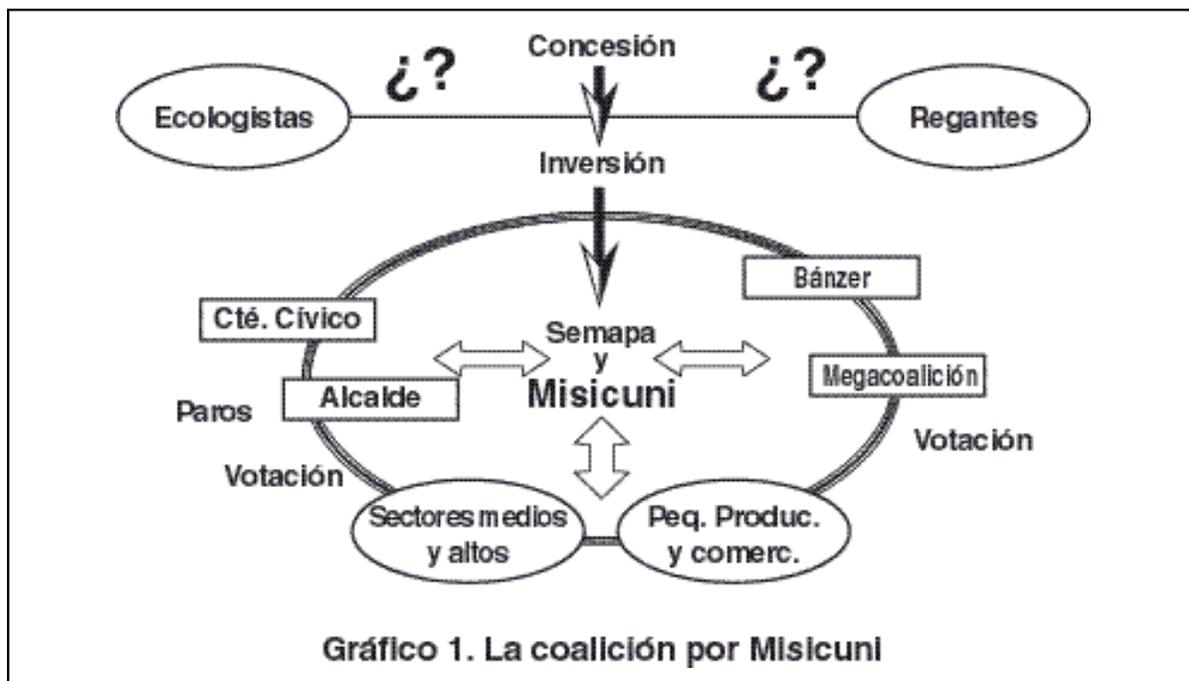
■ En Defensa del Agua

Fuera de la oposición del MNR, la única voz discordante que se escuchaba era la de una pequeña alianza compuesta por el movimiento ambientalista cochabambino y los regantes del valle bajo. Formada desde hace varios años en oposición a la perforación de pozos profundos para abastecer agua a la ciudad, solución alentada por la cooperación francesa, esa alianza no se opuso directamente a la concesión sino a las condiciones normativas que se estaban creando para hacerla posible. Ellos, unidos en un Comité de Defensa del Agua, estaban trabajando en la nueva legisla-



Cholita con Warak'a 05-02-2000 - Foto Thomas Kruse

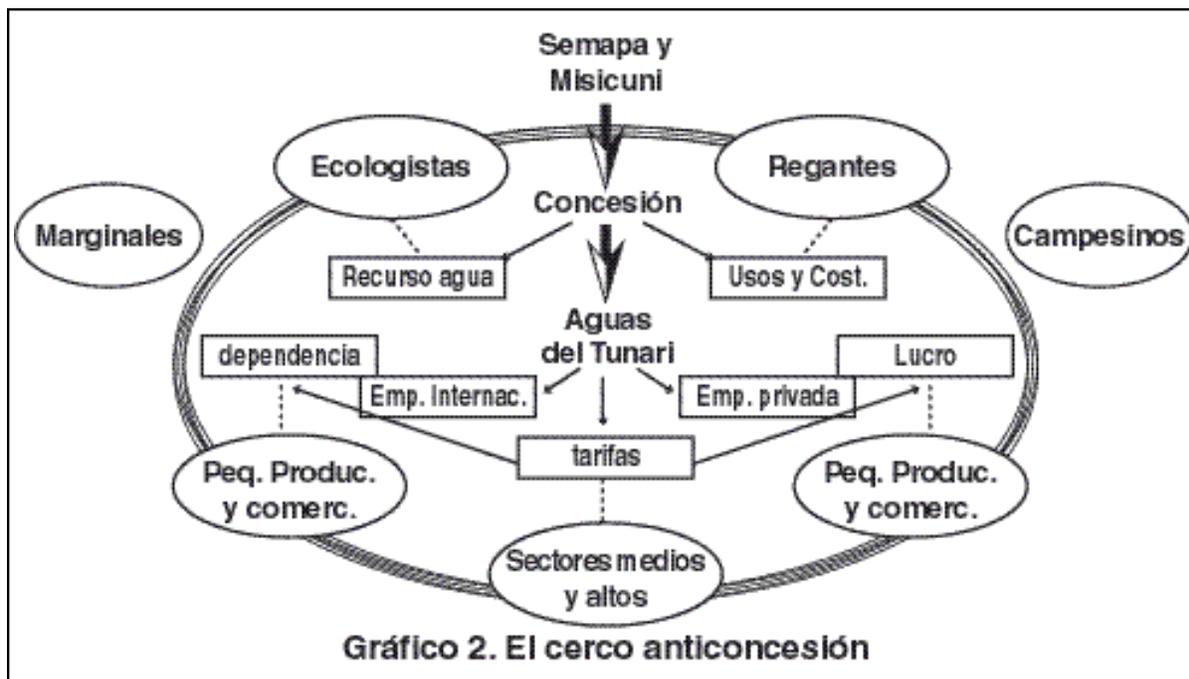
ción sobre el agua, y les llamó de inmediato la atención que algunos temas que se estaban concertando se incluyeran de una manera diferente en el Contrato con Aguas del Tunari y en la Ley 2.029 de Saneamiento Básico promulgada poco después. Los ambientalistas aspiraban a establecer mecanismos que garantizaran el aprovechamiento sostenible y equitativo de las aguas subterráneas y superficiales, y los regantes a que se respetaran las normas del derecho consuetudinario (“usos y costumbres”) que les permitirían mantener el control que hasta entonces ejercían sobre el agua. Pero era una oposición pequeña y apenas perceptible frente a la gran alianza “misicunista” formada por Alcaldía, Comité Cívico y Gobierno Nacional (ver gráfico 1).



Con la participación entusiasta de profesionales, algunos con vocación de servicio y otros con deseos de figuración, todo ese conjunto diverso de reivindicaciones y argumentos en contra del consorcio empezó a fluir de uno a otro grupo y el círculo se empezó a cerrar. La Coordinadora pronto se convirtió en un cerco político sobre Aguas del Tunari, reforzado por algunos partidos de oposición deseosos de romper con la

hegemonía de Reyes Villa en Cochabamba y quebrar la ampulosa coalición gubernamental (ver gráfico 2).

Sin embargo, pronto sumaron a esas reivindicaciones la defensa de los pozos de agua y la oposición al incremento de tarifas, que eran dos temas tratados en el contrato con Aguas del Tunari. Los sectores medios y altos de la ciudad, que son



los que reciben agua del servicio público o que han podido pagar pozos propios, se volcaron de inmediato en contra de esta empresa demandando la revisión del contrato. Tan rápida y masiva reacción atrajo la atención de otras organizaciones sociales y políticas como la Federación de Fabriles y los Colegios profesionales que se sumaron al Comité y crearon la Coordinadora de Defensa del Agua y la Economía Popular.

■ El cerco de la resistencia

La elevación de tarifas, acordada en el contrato para atraer las enormes inversiones requeridas para ampliar la red y hacer Misicuni, fue asociada de inmediato al carácter privado de la empresa y, por tanto, a su racionalidad capitalista basada en el lucro y la ganancia. Racionalidad que aún hoy tiene limitada legitimidad en Cochabamba, donde miles de pequeños productores, comerciantes y transportistas actúan en el mercado pero lo rechazan, no se perciben a sí mismos como empresarios y dudan de su propia acción mercantil. Para ellos, una cosa es vender para ganarse la vida, y otra muy distinta es vender para enriquecerse, aunque en el fondo es lo que harían si pudieran. En esa lógica dual, no les fue difícil unirse a la protesta contra esa empresa que convertiría el agua en un negocio, aunque seguramente no pensaron que de triunfar tendrían que seguir comprando agua de los “poceros” y camioneros que cobran más pero solamente para “ganarse la vida”.

Al mismo tiempo, la concesión y la elevación de tarifas fueron asociadas a la globalización y la renovación de la dependencia debido a la presencia determinante de empresas transnacionales en el consorcio Aguas del Tunari. Y esto sirvió para recordar que la aspiración nacional de la soberanía, “amenazada” esta vez por la privatización, sigue siendo una tarea pendiente, a lo que apeló de inmediato la antigua izquierda que en Bolivia ha sido siempre más nacionalista que la derecha que se proclamaba como tal. De esta manera, la emergente alianza opositora encontró que el discurso nacional popular -o la retórica populista- la articulaba muy bien, integrando a su seno a dirigentes y partidos políticos que habían desaparecido del mapa electoral pero que conservaban su voluntarismo y eran capaces de traducirlo en activismo organizado y consistente.

Mientras todo eso ocurría, la coalición que había producido la concesión maniatada a Misicuni se debilitaba al extremo. El Comité Cívico entró en crisis cuando su Presidente, Edgar Montaña, saltó al escenario político como candidato a Concejal en el partido del Alcalde. A pesar de su victoria electoral, éste no solamente se negó a respaldar el contrato con Aguas del Tunari sino que incluso manifestó su oposición al aumento de tarifas -pese a haber firmado su aceptación durante la negociación- colocándose frente al

gobierno al acusarlo de insensible por no absorber la deuda de SEMAPA. No tardó en producirse la ruptura entre el Alcalde y el gobierno, quebrándose el eje político en el que descansaba la concesión. Los partidos del gobierno estaban agotados con la campaña municipal y sus propias disputas internas, de modo que no lograron explicar su posición ni siquiera a sus militantes, muchos de los cuales engrosaban las filas de la Coordinadora. Defendiendo el proyecto quedaron, prácticamente solos, el Superintendente Luis Uzín y el Presidente de la Empresa Misicuni Gonzalo Rico. Más tarde aparecería fugazmente el Ministro Saavedra Bruno y nunca el consorcio empresarial Aguas del Tunari, salvo en tímidos y tardíos spots televisivos que convocaban a pagar las tarifas para hacer posible la ilusión.

Los disturbios de febrero añadieron un nuevo ingrediente al conflicto, pues la respuesta represiva ensayada por el gobierno no hizo más que recordar el pasado dictatorial del Presidente Banzer, levantando deseos de revancha en quienes lo habían sufrido, y de dramatización de la historia en quienes solamente la conocían de oídas. Los gases y las piedras, las barricadas y el heroísmo querían volvernos a los '70 pero esta vez para darle la vuelta.

Y así llegó abril. Las negociaciones sobre la Ley 2.029 avanzaron a satisfacción de los regantes pero las que se realizaban sobre el contrato con Aguas del Tunari resultaron solamente una distracción mientras se ganaba tiempo y se consolidaban posiciones. La opinión pública recibía un bombardeo de denuncias. Siempre una nueva antes de que la anterior se aclarara o confirmara. No sabía en quién confiar. La gente dudaba de la eficacia del paro pues los costos de febrero estaban frescos en la memoria. Y cuando la Coordinadora parecía derrumbarse, despertaron los '70 en un corralito armado en la Prefectura, donde fueron detenidos sus dirigentes cuando empezaban a dialogar. La desconianza venció las dudas y la furia de la gente empezó a alimentar el círculo con bronca y solidaridad ya ajenas al tema del agua pero genuinas y vitales. Los campesinos se pegaron y en las barricadas encontraron dignidad los marginales urbanos, compartiendo heroísmo con jóvenes militantes que soñaban revivir la Comuna de París o el 17 de octubre en Cochabamba, o cuando menos el abril boliviano del '52.

Y aunque este 9 de abril trajo festejos, trajo también la paradoja de celebrar varias derrotas.

■ Y ahora... ¿dónde está el agua que se defendía?

Los dirigentes de la Coordinadora, que en un momento del conflicto sintieron naufragar su movimiento, lograron encubrir su incapacidad para negociar mejores condiciones del

contrato con Aguas del Tunari, obligándola a retirarse. La recuperación de SEMAPA como “empresa municipal”, aunque ahora conducida por los miembros más politizados de la propia Coordinadora, fue el logro real y simbólico más importante de la “batalla final”. Ya ella se aferran ahora para utilizarla como laboratorio de experimentación de un modelo de gestión que ya tiene nombre y apellido, “autogestionario y social”, pero que no acaba de nacer ni siquiera en el papel.

Menos visibles fueron las victorias particulares. Porque ganaron los regantes, que en nombre de la tradición han logrado conservar el control de los recursos hídricos que, frente a los demás campesinos sin riego, los convierte en privilegiados. Y ganaron los propietarios de pozos, que sin control ni regulación pública privatizaron de facto los recursos del subsuelo, que la Constitución dice que son de todos, y que los seguirán aprovechando tanto para su consumo como para su comercialización y venta. Y ganaron los distribuidores en camiones cisterna, que seguirán aprovechando los enormes espacios que tienen en un mercado libre para la especulación y en el que el control y la regulación no tienen cabida.

Derrotados fueron los de la alianza “misticunista” pues lo poco que lograron avanzar para hacer realidad el mito ha quedado sumergido en el mismo limbo que el contrato con Aguas del Tunari que prometía financiarlo. Arriba en la montaña continúa perforándose el túnel de trasvase de Misicuni, a pesar de que los contratistas de Astaldi-Ice -que forzaron su presencia en la obra con promesas difíciles de cumplir- siguen intentando modificar las condiciones de un contrato que, defendiendo el interés público, se yergue para ellos como una amenaza.

Derrotado fue el Alcalde Reyes Villa por no haber sido capaz de defender su proyecto y de demostrar un liderazgo constructivo, que es el que pone en juego su caudal político al servicio de una causa. Y derrotado fue el gobierno del Presidente Bánzer, que puso en evidencia la extrema debilidad de la coalición que lo sustenta y su falta de visión para resolver problemas sustanciales y prevenir conflictos.

Derrotado fue el consorcio Aguas del Tunari, que perdió una oportunidad de inversión y mostró al mundo su incapacidad para enfrentar los desafíos de invertir en países complejos como Bolivia. Tal vez logre recuperar sus escasas inversiones y consolar a sus inversionistas con una indemnización, pero pesará sobre sus ejecutivos el estigma de la incompetencia.

Derrotados fueron los ambientalistas, que crearon un movimiento que los ignora y que menosprecia su preocupación, y que a pesar de tenerlos cerca sigue pensando que en la explotación de los recursos naturales está la respuesta a las presiones que impone el corto plazo.

Derrotados fueron los que lucharon contra la mercantilización del agua, porque el agua se seguirá transando pero en un mercado negro y sin controles, donde los especuladores seguirán expoliando a los más pobres. Y derrotados fueron los anti-privatizadores porque los recursos comunes seguirán bajo la lógica de una privatización salvaje, dispersa y descontrolada.

Pero los que sufren la mayor derrota son los 100 mil hogares cochabambinos que seguirán creyendo que el agua es un lujo que no hay que pagar. La mitad mantendrá abiertas sus pilas todo el día para captar lo que les llegue en las esporádicas horas que se les asigna, un 20% seguirá imaginando cómo mantener su pozo que cae en producción porque siempre hay cerca alguna nueva perforación, y los demás seguirán tratando de hacer amistad con el dueño de un cisterna para que en la próxima sequía los recuerde aunque sea cobrando más. Algunos quizás encontrarán consuelo recordando la batalla librada contra el capitalismo transnacional y el gobierno neoliberal, a quienes ciertamente doblegaron y enseñaron una formidable lección: deben tomarlos en cuenta.

Pero fue, en suma, derrotado el país, porque se postergó nuevamente la solución de un problema crucial de la región que articula oriente y occidente, y se crearon nuevas obligaciones económicas que terminarán sacrificando algunas oportunidades en algún rincón rural donde la gente que sufre mayor pobreza no tiene siquiera voz para acusar a quienes juegan con su futuro.

“Y derrotado fue el gobierno del Presidente Bánzer, que puso en evidencia la extrema debilidad de la coalición que lo sustenta y su falta de visión para resolver problemas sustanciales y prevenir conflictos.”



Continuidad y Ruptura: la “Guerra del Agua” y los nuevos movimientos sociales en Bolivia

Por Carlos Crespo F.*

■ Introducción

Oscar Olivera, uno de los portavoces de la Coordinadora del Agua y la Vida, gusta decir que “los cochabambinos, después de quince años han perdido el miedo..., y por primera vez creen en alguien que no les va a engañar” ¿Cómo se llegó al nivel de movilizaciones, sólo recordadas en la revolución del ‘52 y las coyunturas de recuperación democrática? ¿Qué factores influyeron para que la “señora” Coordinadora¹ tenga una legitimidad democrática pocas veces vista en la cultura política boliviana?

El presente texto es un intento por dar algunas pistas al respecto, y plantea que la Coordinadora es expresión de un movimiento social que recupera las pulsiones autogestionarias e insurreccionalistas de la Central Obrera Boliviana (o “forma COB”), en el contexto de las nuevas condiciones que ha impuesto el neoliberalismo, perfilando por tanto un conjunto de dispositivos de resistencia, novedosos para la tradición “cobista” de los movimientos sociales en Bolivia, hecho que la aproxima a los nuevos movimientos sociales de resistencia al capitalismo global, que están emergiendo en Latino América y el mundo globalizado (Crespo, 2000). En suma, la Coordinadora recupera elementos de la forma “COB” de resistencia, y a la vez va más allá de ella.

El documento está dividido en tres partes: en la primera se describen algunos antecedentes históricos que explican la “Guerra del Agua”; la segunda parte está dedicada a reconstruir los principales hechos que caracterizaron al conflicto, en sus diferentes momentos de movilización y negociación. En la última parte se desarrollan aspectos que a mi juicio muestran los rasgos de continuidad y ruptura con los movimientos sociales previos, particularmente las articuladas alrededor de la COB.

* Sociólogo; MSC en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (CESU-UMSS). Actualmente doctorante en Oxford Brookes University (UK). Coordinador del Área Medio Ambiente CESU; catedrático en la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba-Bolivia).



Aguas “Go Home” 07-04-2000 - Foto Thomas Kruse

21

■ I. Antecedentes

Bolivia ha sufrido el ajuste estructural, a partir del año 1985, expresado en reformas económicas, sociales y políticas, orientadas a promover una economía de mercado, una sociedad de stakeholders y un sistema político basado en la democracia liberal representativa.

El ajuste estructural debilitó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente la Central Obrera Boliviana (COB), que hasta el ‘85 constituyó un verdadero factor de poder en la política boliviana, e introdujo la mediación política partidaria dentro la cultura política del país.

Desde los ‘70, en el valle de Cochabamba, ya existían movimientos campesinos de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad; en el año 1994 se genera una gran movilización campesina contra la perforación de pozos profundos, por parte de la entonces empresa municipal de agua (SEMAPA) (Crespo, 1999). De estos movimientos surgirá posteriormente la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), uno de los actores principales involucrados en la “Guerra del Agua”.

Históricamente el tema del agua ha sido muy sensible en la región, pues el valle de Cochabamba (donde viven al-

rededor de 700.000 personas, del área urbana y rural) es una zona ecológicamente considerada semiseca, por tanto sufre una crónica escasez del recurso. Por otro lado, apenas el 50% de la población urbana tiene acceso al sistema público de distribución de agua potable, por tanto aproximadamente el 35% se ha organizado en cooperativas, asociaciones, comités de agua, y un 15% se aprovisiona a través de carros cisterna (“aguateros”) u otros medios alternativos.

Desde hace aproximadamente 40 años, desde los sectores económicos y políticos dominantes de la región, se ha planteado como solución la implementación de un megaproyecto de trasvase de agua, mediante un túnel de 19 km. de largo y una presa de 115 metros de altura. Este proyecto, denominado Misicuni, ha sido instrumentalizado por las elites políticas para ganar elecciones y sacar otras ventajas políticas.

■ II. Los hechos

Las causas directas para la “Guerra del Agua” han sido dos:

1. La concesión, en forma poco clara, de la empresa municipal de distribución de agua (SEMAPA) a un consorcio privado internacional, denominado Aguas del Tunari, incluyendo la implementación del proyecto Misicuni (septiembre 1999).
2. La aprobación en el parlamento, sin haber consensado previamente con los stakeholders, de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (octubre 1999).

Desde junio de 1999, un grupo de técnicos, representantes vecinales, ambientalistas, se reúne para analizar las probables consecuencias de la Ley, y se organiza en torno a un Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar.

En julio del mismo año el Banco Mundial emite un informe reservado sobre el gasto público en Bolivia sobre el sector, donde recomienda las concesiones privadas, destaca el rol de las superintendencias como organismos de regulación y propone la no subvención en la distribución del agua potable (World Bank, 1999).

En septiembre el gobierno, a través de la Superintendencia de Aguas, realiza la concesión de SEMAPA a la úni-

ca empresa que se presentó a la concesión: el consorcio internacional AGUAS DEL TUNARI, conformado por International Water U.K. (subsidiaria a su vez de Bechtel) con un 55% de las acciones, Abengoa de España con un 30%, y el resto por empresas bolivianas, una de ellas vinculada con el gobierno actual. La concesión de hecho era irregular, pues no llenaba los requerimientos establecidos por la legislación boliviana (se necesitan tres propuestas para validar una licitación). A las pocas semanas (fines de octubre), se aprueba en una sesión maratónica la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Organizaciones de la sociedad civil cochabambina hacen conocer sus observaciones a ambas decisiones gubernamentales.

Algunas observaciones a Ley y Contrato:

- No respeto a usos y costumbres, esto es, las formas tradicionales, de acceso y uso del recurso.
- No garantía de ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni.
- Inseguridad sobre el futuro de las instituciones de distribución de agua que no tienen fines de lucro (empresas municipales, asociaciones, comités, cooperativas de agua).
- Estas instituciones sujetas a intervención judicial.
- Monopolio de concesionarios empresariales.
- Prohibición de perforar pozos para comunidades.
- Excesivo poder de Superintendencias.
- Modificación de tarifas no consultadas con población, además de estar indexadas al dólar.
- Criterio económico en fijación de tarifas y concesiones, antes que social y ambiental.

En noviembre se organiza el primer bloqueo de campesinos y regantes, dejando casi paralizada la región. Ese mes se crea la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, organismo que agrupa a una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil regional.

Pero la gota que llenó el vaso fue que la empresa Aguas del Tunari incrementó las tarifas en un 35% (aunque en muchos casos llegó a más del 100%),

a partir de enero del 2000, sin antes haber mejorado el servicio; la población reaccionó con indignación y el 11 de enero se realizó una movilización organizada por la Coordinadora del Agua, que terminó en represión policial. El 4 de febrero, la Coordinadora org-

ganizó “la toma simbólica de la ciudad de Cochabamba”, para demandar, festiva y pacíficamente, cinco puntos:

- Derogación de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

“En noviembre se organiza el primer bloqueo de campesinos y regantes, dejando casi paralizada la región. Ese mes se crea la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, organismo que agrupa a una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil regional.”

- Derogatoria de los decretos 25.351 y 25.413, que hicieron posible la concesión.
- Nulidad del contrato con Aguas del Tunari.
- Destitución del Superintendente de Saneamiento Básico.
- Consensuar con todos los sectores la Ley del Recurso Agua, en fase de aprobación en el parlamento.

El gobierno reprimió violentamente la protesta. Los enfrentamientos continuaron el día 5, pues la población (urbana y rural) espontáneamente salió a las calles para enfrentar a la policía. La ciudad quedó completamente paralizada por los bloqueos en todas las rutas de acceso dentro y fuera del centro urbano.

Resultado de la revuelta: 22 heridos, 135 detenidos, y un acuerdo, bajo la mediación de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, cuyos puntos más importantes son:

- Revisión del contrato de concesión con Aguas del Tunari.
- Elaboración de una ley modificatoria de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con participación de las representaciones campesinas, regantes y organizaciones sociales de distribución de agua.
- Suspensión del incremento tarifario mientras concluyan las negociaciones.

Es decir, la movilización obliga al gobierno a reconocer a la Coordinadora como actor del conflicto y negociar modificaciones a la Ley y Contrato.

En las negociaciones de la Ley se logran consensos, logrando modificar 31 artículos de los 75, hecho inédito en la vida política y legislativa de Bolivia. Pero en las negociaciones del Contrato no hay acuerdos, y luego de una semana la Coordinadora decide abandonar las negociaciones, luego de emitir su documento de conclusiones.

El 4 de abril la Coordinadora inicia la denominada “Batalla final”, pidiendo que Aguas del Tunari (AT) se vaya del país; el departamento de Cochabamba aparece totalmente aislado del país por los bloqueos campesinos, la ciudad es prácticamente tomada por la multitud durante una semana, hay enfrentamientos con la policía y ejército con un saldo de 1 muerto y 30 heridos; se declara el estado de sitio, aun así la movilización continúa; el 10 de abril había casi 50.000 personas tomando la plaza de armas; el gobierno decide rescindir contrato con la empresa, y AT decide retirarse de Bolivia, pidiendo una indemnización millonaria. La victoria es de la Coordinadora, convertida en portavoz de la región.

El gobierno declara que no pagará una cuantiosa deuda que arrastra la empresa de agua y señala que la Coordina-



Cholita y policía 08-04-2000 - Foto Thomas Kruse

dora se hará cargo de la administración. Esta acepta y en este momento hay un debate sobre qué tipo de empresa distribuidora de agua se debe implementar.

■ III. Ruptura y continuidad en el movimiento de la coordinadora

¿Qué elementos de continuidad y ruptura muestra el movimiento alrededor de la Coordinadora del Agua y la Vida? De ello hablo en el presente acápite.

Composición

La Coordinadora nace fundamentalmente alrededor de entidades autónomas como el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), la Central Obrera Departamental y la Federación de Trabajadores Fabriles, pero de ella han participado una multiplicidad de sectores: organizaciones vecinales, colegios de profesionales, perforadores de pozos, maestros, campesinos, cocaleros, universidad, jubilados, muchos de ellos sectores que la COB había “olvidado”; es-

ta diversidad también se expresaba en un espectro diverso de ideologías políticas: neomarxistas, ambientalistas, liberales demócratas, cívicos, jóvenes anarquistas.

Tipo de acciones

Respecto a sus acciones, la Coordinadora, si bien ha recuperado formas “clásicas” de protesta en el marco de la tradición insurreccionalista de la COB y la CSUTCB (organización nacional campesina), como son los bloqueos de caminos, paro indefinido, marchas de protesta, a la vez incorpora elementos de protesta novedosos, espectaculares, de gran impacto en los medios de comunicación. Ambas tácticas se complementaron y reforzaron mutuamente. A través de este tipo de actos la Coordinadora, que inicialmente carecía de acceso a los medios de comunicación, paulatinamente amplió su cobertura, capacidad de información y comunicación con la gente.

Algunas novedosas formas de resistencia aplicadas por la Coordinadora:

- *Meetings de protesta los martes en la plaza de armas (julio 99-abril 00). Organizado por el Comité de Defensa del Agua, cada martes en la mañana se mostraban paneles informativos, se habilitaban libros de firmas para expresar su protesta, y la gente de la Coordinadora conversaba directamente con el público y la prensa sobre el tema.*

- *Quema pública de facturas (enero 00). Acto de protesta en la plaza de armas de la ciudad en protesta por el incremento de tarifas de agua.*
- *Convocar a la “toma simbólica de Cochabamba” (febrero 00), para hacer conocer, pacífica y festivamente, que la ciudad es también de los “excluidos por el modelo neoliberal”.*
- *Concentración festiva de Carnaval (marzo 00). Aprovechando la ocasión se realizó una marcha festiva, con bandos bufos y “taquipayanacus” (coplas tradicionales de carnaval).*
- *Consulta Popular (marzo 00). Al margen de su legalidad, sirvió para motivar más a la población, donde la prensa dio gran cobertura.*
- *Teatro/Graffiti (febrero-abril 00). Grupos de jóvenes, de apoyo a la Coordinadora, realizaban actos culturales públicos, que además de los graffittis, medio de comunicación por excelencia de la juventud, formó parte de la artillería de resistencia de la Coordinadora.*
- *Toma simbólica a SEMAPA y el Comité Cívico (abril, 00). Convocada durante la “batalla final”, convocó a miles de ciudadanos, a pesar de lo cual no hubo grandes destrozos, como temía el gobierno.*
- *Cerco a la Prefectura (abril 00). Movilización para obligar al gobierno a negociar y aceptar la rescisión del contrato con AT.*

Asimismo, amalgamar la presión social con la lucha legal (demanda ante el Tribunal Constitucional) como otro



escenario de resistencia, es una de las innovaciones del movimiento del agua.

Negociación y presión como táctica

Siguiendo una práctica común del Estado frente a los conflictos, el gobierno osciló, dependiendo de la coyuntura, entre negar el conflicto o patologizarlo², es decir, no reconocerlos como actores, producto de la exaltación que hace de las instituciones de la democracia representativa liberal como únicos escenarios para canalizar demandas sociales, y por tanto garantía de vigencia de la gobernabilidad.

El conflicto aparece, por tanto, también como un recurso de la sociedad civil, “para ser escuchado”, actitud que ha formado parte de la cultura política de los movimientos sociales bolivianos, articulados en la COB. Frente a la resistencia, para aplacar, el Estado utiliza los recursos que tiene a mano, formen o no parte de los recursos habilitados por la Constitución Política del Estado, producto de una cultura autoritaria plenamente vigente en su funcionamiento.

La movilización obliga al Estado a negociar; en este momento, la Coordinadora, a diferencia de ciertas demandas maximalistas de la COB de los ‘80 (salario mínimo vital, escala móvil), que constituían consignas de movilización antes que producto de un análisis serio de su viabilidad, se rodeó de un equipo de asesores que analizó en detalle los contenidos de la Ley y el Contrato. En el caso de la Ley, ya existía la Mesa de Trabajo, una agrupación de ONGs y organizaciones campesinas que estaba analizando la Ley de Aguas, cuyos asesores elaboraron junto a la FEDECOR una propuesta de modificación de la Ley 2.029, que fue puesta a consideración de la mesa de negociación. En el caso del Contrato, el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, miembro de la Coordinadora, ya había revisado en detalle los términos de referencia del contrato del proyecto Misicuni y SEMAPA, haciendo conocer sus observaciones desde junio de 1999. Por tanto, los argumentos de la Coordinadora estaban sustentados en el análisis previo de la documentación existente.

Manejo de media y nuevas tecnologías de información

En una época donde “lo que aparece en los media existe”, en estos años de ajuste estructural, los movimientos so-

ciales, con excepciones, apenas si tuvieron acceso a la prensa, debido tanto a que los empresarios paulatinamente cerraron la cobertura a la sociedad civil, como al producto de una adecuada estrategia, particularmente de la COB, para llamar su atención.

Al inicio del conflicto, los movimientos de oposición a la Ley y el Contrato fueron estigmatizados como marginales, el comité de Defensa del Agua o la FEDECOR eran consideradas agrupaciones (y lo eran) minoritarias, parte del “folklore político” de resistencia marginal al modelo. Las acciones periódicamente “espectaculares”, novedosas para el imaginario local, influyeron indudablemente en una mayor cobertura en la prensa.

La Coordinadora, al tener presencia en los medios de comunicación, aprovechaba para espectacularizar también los hechos:

- *Mostrar públicamente facturas incrementadas, que traían los vecinos.*
- *Llevar a la prensa vecinos pobres que habían recibido facturas incrementadas.*
- *Llevar a periodistas a lugares donde había problemas con el funcionamiento de la red.*

A la vez, la Coordinadora mostró una novedosa utilización de las nuevas tecnologías de información, que anteriores movimientos sociales no habían realizado: uso de fax y correo electrónico para enviar y recibir mensajes, celulares para la comunicación entre los líderes del movimiento (urbano y rural) durante momentos de bloqueos y enfrentamientos con la policía, información en páginas web para denunciar la situación, recuperar información de la web para argumentar en las negociaciones y contar con noticias actualizadas sobre la problemática, redes de solidaridad en la web... El conflicto del agua en Cochabamba seguramente es la primera revuelta en la era del Internet, en el país.

Comunicación con la gente

En los momentos históricos donde el sindicalismo co-bista, particularmente minero, era más que una organización tradeunionista, el sindicato canalizaba demandas más allá de sus funciones habituales (Escobar, F., 1984). La relación de la Coordinadora con la población recupera esta rica experiencia del movimiento sindical boliviano, utilizan-

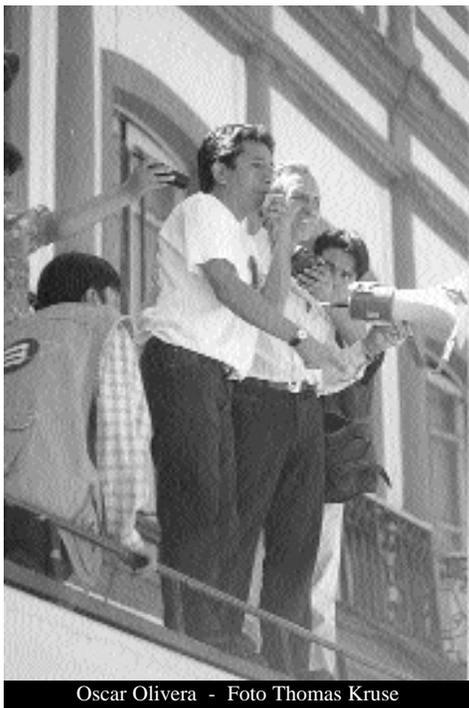
“Siguiendo una práctica común del Estado frente a los conflictos, el gobierno osciló, dependiendo de la coyuntura, entre negar el conflicto o patologizarlo, es decir, no reconocerlos como actores, producto de la exaltación que hace de las instituciones de la democracia representativa liberal como únicos escenarios para canalizar demandas sociales, y por tanto garantía de vigencia de la gobernabilidad.”

do en algunos casos los medios de comunicación. En estas acciones hay un elemento común: la gran capacidad de los representantes de la Coordinadora para escuchar, virtud que a mi juicio se ha perdido entre los dirigentes políticos y sindicales, y que permitió un diálogo con la población, y a la vez ser retroalimentada en sus acciones.

Ejemplos de la comunicación Coordinadora-Población:

- *La sede de la Federación de Trabajadores Fabriles, era el lugar donde la población (“el pueblo sencillo y trabajador” como diría Oscar Olivera) llevaba sus quejas: facturas incrementadas, cartas de vecinos (principalmente jubilados) protestando por la situación, señoras que deseaban hacer saber por qué les habían incrementado su tarifa...; algún periodista decía que la sede de la Coordinadora “era un paño de lágrimas”.*
- *Esta misma situación se observaba los martes en la mañana, donde el Comité de Defensa del Agua recibía quejas y protestas ciudadanas.*
- *En las entrevistas en vivo por TV o radio, la población se comunicaba directamente con los representantes de la Coordinadora para dar su aliento, apoyo o mostrar sus diferencias.*
- *Cotidianamente los representantes de la Coordinadora asistían a asambleas barriales o comunales para explicar el problema del agua, escuchar sus demandas, y en algunos casos organizar Comités locales de defensa del agua.*
- *Las concentraciones de la plaza constituyeron verdaderos escenarios de diálogo con la población, pues allí se decidieron muchas acciones futuras.*

26



Oscar Olivera - Foto Thomas Kruse

Alianza Urbano - Rural

En los '90, cuando los campesinos regantes se movilizaron contra la perforación de pozos profundos por parte de SEMAPA, en el valle bajo y central del Departamento, el gobierno logró dividir a la opinión pública urbana contra el movimiento. En este nuevo momento de la “Guerra del Agua”, el nivel de movilización alcanzado es producto de la confluencia de intereses entre el área rural y el área urbana en la defensa del recurso hídrico, pues tanto la Ley como el Contrato afectaban, en mayor o menor grado, a ambos sectores.

La Coordinadora logró articular a la población, rural y urbana, principalmente debido a que el acceso a recursos hídricos y sus servicios ambientales afecta a todos, pues como decía una de las consignas de las movilizaciones “el agua es vida”; es decir, la reivindicación del agua como bien público.

Esta articulación de voluntades va más allá del discurso de la “alianza obrera campesina” manejado por la COB en los '80, donde los campesinos mantenían un rol subordinado a las decisiones de la “vanguardia proletaria”. A mi juicio hubo un diálogo más horizontal entre el área rural y urbana, buscando proteger los intereses de ambos sectores.

Ética comunitaria

El neoliberalismo, discurso económico para la expansión del capitalismo global, es en el fondo “un programa de destrucción metódica de lo colectivo/comunitario” (Bourdieu, 1999:1), y a la vez una exaltación del individuo como el sujeto por excelencia del modelo. El agua, al ser reivindicada como bien público y manejada según “usos y costumbres”, cuestiona este dispositivo de poder, esta forma de subjetivación del individuo (Nash, K., 2000; 24) y reivindica otro tipo de subjetividad, comunitaria/asociativa, y de solidaridad y apoyo mutuo. De esta manera la Coordinadora escarba, directa o indirectamente, una ética comunitaria, de apoyo mutuo (formas de gestión comunitaria del agua, sea riego o consumo humano) y solidaridad, frente a la lógica privatista y mercantilista del modelo, expresado en el Contrato y la Ley.

La Democracia del agua

La privatización promueve un debilitamiento de la democracia local, por tanto el mayor reto en la resistencia a este proceso es el uso de instituciones democráticas locales (Hall, D. y Goudrianan, J. W., 1999). El movimiento de la Coordinadora ha mostrado las debilidades del sistema democrático boliviano. En este sentido, la “Guerra del Agua” ha puesto en tela de juicio el conjunto del sistema político y sus dispositivos de poder.

Ha puesto un signo de interrogación a la forma en que las políticas públicas promueven procesos de participación y concertación, asumiendo que todos los actores involucrados están en las mismas condiciones y relación de fuerzas. En Bolivia definitivamente no existen actores iguales, pues el acceso a la información, recursos económicos, técnicos, influencia en las agencias gubernamentales, no es equitativo ni transparente. El conflicto aparece por tanto como un acto de visibilizar actores no reconocidos por el Estado, y por otro lado obligar al poder dominante a dialogar y llegar a acuerdos.

En segundo lugar, concebir la participación como un procedimiento administrativo de consulta y no un hecho político de toma de decisiones muestra las debilidades de la Participación Popular. La “Guerra del Agua” mostró la demanda de la sociedad civil de asumir un rol protagónico en la toma de decisiones: una ley aprobaba de forma inconsulta, un contrato firmado a espaldas de la sociedad (incluyendo una cláusula de confidencialidad del contrato) influyeron en la magnitud del conflicto.

En tercer lugar, en los tiempos que corren la participación popular se plantea como escenario de conflicto no sólo de concertación: con partidos políticos y municipios corruptos, donde los líderes locales constituyen poderes autoritarios y clientelistas, una moraleja de la Coordinadora es la oportunidad que tiene la sociedad civil de fiscalizar la gestión local; así como se expulsó a una multinacional apadrinada por el gobierno, gracias a un proceso de fiscalización, es posible realizar un seguimiento estricto a los gobiernos municipales y las empresas de servicios básicos, hoy privatizadas.

Si “las recetas que abogan por la privatización del agua, son en realidad una violación de principios porque abogan por un derecho sin límite de explotación del agua... (superando) los límites democráticos, los derechos que tiene la gente” (V. Shiva, 2000), la Coordinadora ha sabido reivindicar “la democracia del agua”, como parte de un proceso por reinventar la democracia (Idem).

■ II. A manera de conclusión

1. El ajuste estructural no es sólo una estrategia de reorganización socioeconómica y política, implica a la vez, en un sentido foucaultiano, un proyecto de “normalización” de la sociedad a través de la difusión de “discursos de verdad” que son internalizados por la población, y bajo los cuales actúa, participa, produce saberes; el mercado y la privatización como medios de gestión más eficientes de los recursos naturales, la gobernabilidad como sinónimo de democracia, los partidos políticos como única forma de mediación política, la partici-

pación como concertación y consenso... son verdades que han sido instituidas en nuestros países durante estos años de apuesta neoliberal. Pero la “Guerra del Agua” de Cochabamba ha visibilizado también otras verdades, otro tipo de subjetividades basadas en una ética asociativa, solidaria, de bien común, pero a la vez diversa y plural, y cuyas pulsiones las encontramos en la veta autogestionaria y comunalista de ciertos momentos históricos de la COB. La Coordinadora recupera nuevamente esta ética gracias a que, volviendo a la frase de Olivera del inicio, “los cochabambinos, después de quince años han perdido el miedo...”.

2. Vivimos una era de incertidumbres, el neoliberalismo es la exaltación del corto plazo, pues el mercado así lo define; pero esta lógica, impuesta en países como Bolivia, donde el sistema político está basado en relaciones de poder clientelistas, prebendales, en suma “premodernas”, provoca que la incertidumbre se convierta en absoluta desconfianza del sistema político y sus instituciones, traducida en una escasa legitimidad y representatividad; por el otro lado, la crisis orgánica en la que se encuentra la COB hace que la sociedad civil no tenga un referente organizativo donde apoyarse; en esta coyuntura surge la Coordinadora, producto de la resistencia antes que la creación de un partido político, con una legitimidad social inédita en las luchas sociales bolivianas de los últimos quince años, de ahí también el sentido de la frase de Olivera, “...por primera vez creen en alguien que no les va a engañar”.

3. La Coordinadora, si bien se asienta en las pulsiones insurreccionalistas de la “forma COB”, está pergeñando a la vez rasgos de ruptura con la tradición clasista y centralista de ésta; al mismo tiempo, su desdén por el sistema político vigente y su reivindicación de participación democrática, solidaridad y bien común, está orientando los nuevos escenarios y desafíos de la democracia boliviana.

4. Hoy, en Cochabamba existe una gran incertidumbre respecto al desafío de administrar el agua bajo criterios que no estén orientados al lucro, y sí asentados en una visión del agua como bien social, pues los poderes a los que el movimiento de la Coordinadora ha afectado, están buscando aislar, deslegitimar sus acciones, a la vez que existe el riesgo de que sus portavoces y líderes sean cooptados por el poder dominante y el sistema político. De todas maneras, hasta donde ha llegado, el “fenómeno” Coordinadora ha promovido la modificación del espectro político del país: luego de las jornadas de febrero y abril, Cochabamba y el país ya no serán los mismos, y los futuros movimientos sociales en el país tomarán como referente la experiencia cochabambina.

5. El movimiento alrededor de la Coordinadora resume el nuevo perfil de los movimientos sociales que empiezan a tomar cuerpo en Bolivia:

- Vinculadas principalmente con problemáticas de la cotidianidad de la gente: acceso no equitativo y uso no sustentable de los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos prestan, seguridad, flexibilidad laboral, demandas de mayor participación en la gestión local, control democrático en la toma de decisiones, aspectos que afectan a las condiciones socioeconómicas y calidad de vida de la población, y por tanto no tienen necesariamente un contenido “clasista”;
- Movimientos con mayor “flexibilidad discursiva”, es decir, menos relacionados a las posiciones clasistas y obreristas de la COB, y al mismo tiempo mayor heterogeneidad y diversidad en su composición, expresados por tanto en la revalorización de un ética solidaria/de apoyo mutuo, aunque desde la diferencia.
- Incorporación de otras tácticas de presión social, incluidos dispositivos legales, adaptadas a las condiciones impuestas por la impronta de los “media” en la vida cotidiana de la gente.

Oxford, Agosto 2000

■ Bibliografía

BOURDIEU, Pierre (1998) **The essence of Neoliberalism**. Le Monde Diplomatique. December.

CRESPO, Carlos (1999) “La Guerra de los pozos”. El conflicto por la perforación de pozos profundos en Vinto-Sipe Sipe. En **Conflictos Ambientales. Dos casos: agua y territorio**. CERES. Cochabamba.

CRESPO, Carlos (2000) **La “Guerra del Agua”: Nuevos Movimientos Sociales y Crisis de Dispositivos del Poder**. Ponencia al Seminario. PROMIC/IESE/CISO. Cochabamba

ESCOBAR, Filemon (1985). **Testimonio de un militante obrero**. HISBOL. La Paz.

HALL, D and GOUDRIANAN Jan Willeim (1999) **Privatization and Democracy**. Public services International Research Unit. Greenwich.

NASH, Kate (2000) **Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics, and Power**. Blackwells. Oxford.

SHIVA, Vandana (2000) Intervención en la 4ta Cumbre de los países P7 “Water a right to life in the 21st Century”. European Parliament, Brussels, 7-10 June.

WORLD BANK (1999) **Bolivia: Public Expenditure Review**. Washington D.C.

■ Notas

1 Mucha gente creía que “la Coordinadora” era una mujer, y por tanto pedían a la “señora Coordinadora” que luche hasta el final, sin traicionar a los cochabambinos.

2 Término utilizado por Thomas Kruse en un debate con los investigadores del CERES sobre la “Guerra del Agua”.

